



REPÚBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

6^a REUNIÓN – 3^a SESIÓN ESPECIAL

22 DE MAYO DE 2019

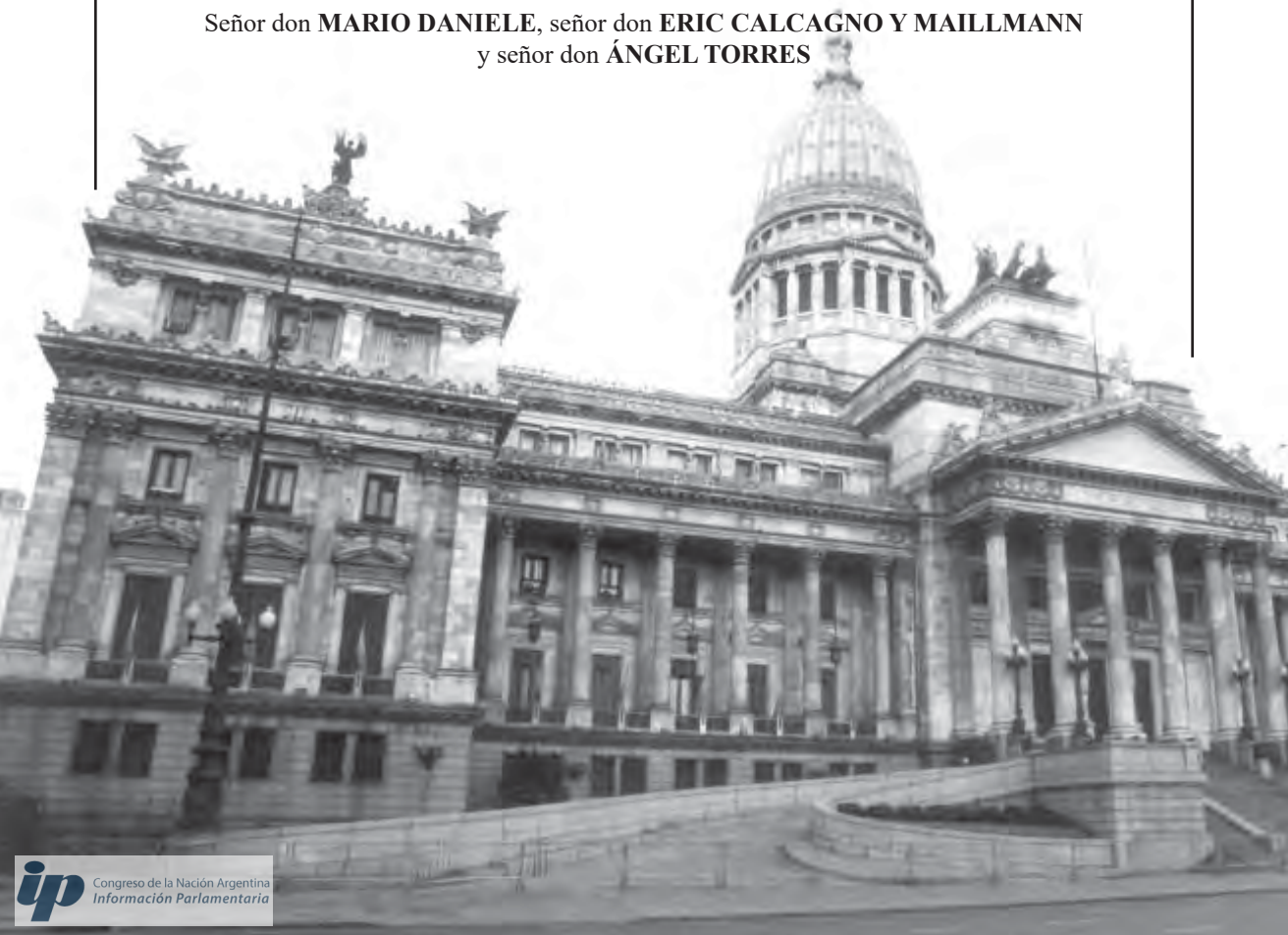
Presidencia de la señora vicepresidente de la Nación, licenciada
MARTA GABRIELA MICHETTI, y del señor presidente provisional
del Honorable Senado,
senador don **FEDERICO PINEDO**

Secretarios:

Señor don **JUAN P. TUNESSI** y señor don **HELIO REBOT**

Prosecretarios:

Señor don **MARIO DANIELE**, señor don **ERIC CALCAGNO Y MAILLMANN**
y señor don **ÁNGEL TORRES**



PRESENTES:

AGUILAR, Eduardo Alberto
 ALMIRÓN, Ana Claudia
 BASUALDO, Roberto Gustavo
 BLAS, Inés Imelda
 BOYADJIAN, Miriam Ruth
 BRAILLARD POCCARD, Néstor Pedro
 BRIZUELA y DORÍA, Olga Inés
 BULLRICH, Esteban José
 CASERIO, Carlos Alberto
 CASTILLO, Oscar Aníbal
 CATALÁN MAGNI, Julio César
 CATALFAMO, María Eugenia
 COBOS, Julio César Cleto
 DE ANGELI, Alfredo Luis
 DURANGO, Norma Haydé
 ESPÍNOLA, Carlos Mauricio
 FERNÁNDEZ de KIRCHNER, Cristina Elisabet
 FERNÁNDEZ SAGASTI, Anabel
 FIAD, Mario Raymundo
 FIORE VIÑUALES, María Cristina del Valle
 FUENTES, Marcelo Jorge
 GARCÍA LARRABURU, Silvina Marcela
 GIACOPPO, Silvia del Rosario
 GONZÁLEZ, Gladys Esther
 GONZÁLEZ, Nancy Susana
 GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel
 IANNI, Ana María
 KUNATH, Sigrid Elisabeth
 LÓPEZ VALVERDE, Cristina del Carmen
 LOVERA, Daniel Aníbal
 LUENZO, Alfredo Héctor
 MARINO, Juan Carlos
 MARTÍNEZ, Ernesto Félix
 MARTÍNEZ, Julio César
 MENEM, Carlos Saúl
 MERA, Dalmacio Enrique
 ODARDA, María Magdalena
 OJEDA, José Anatolio
 PAIS, Juan Mario

PEREYRA, Guillermo Juan
 PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos
 PICHETTO, Miguel Ángel
 PILATTI VERGARA, María Inés
 PINEDO, Federico
 REUTEMANN, Carlos Alberto
 RODRÍGUEZ MACHADO, Laura
 ROMERO, Juan Carlos
 ROZAS, Ángel
 SACNUN, María de los Ángeles
 SCHIAVONI, Humberto Luis Arturo
 SNOPEK, Guillermo Eugenio Mario
 SOLARI QUINTANA, Magdalena
 TAPIA, María Belén
 UÑAC, José Rubén
 URTUBEY, Rodolfo Julio
 VARELA, Marta Lucía
 VERASAY, Pamela Fernanda

AUSENTES:

ALPEROVICH, José Jorge
 CLOSS, Maurice Fabián
 COSTA, Eduardo Raúl
 ITÚRREZ de CAPPELLINI, Ada Rosa del Valle
 GONZÁLEZ, María Teresa Margarita
 MAYANS, José Miguel Ángel
 MIRKIN, Beatriz Graciela
 MONTENEGRO, Gerardo Antenor
 PORCEL de RICCOBELLI, Blanca Felisa
 SOLANAS, Fernando Ezequiel

AUSENTE, CON AVISO:

CREXELL, Carmen Lucila

LICENCIA:

ELÍAS de PEREZ, Silvia Beatriz
 PEROTTI, Omar Ángel
 POGGI, Claudio Javier
 RODRÍGUEZ SAÁ, Adolfo

SUMARIO

1. **Izamiento de la bandera nacional.** (Pág. 3.)
2. **Himno Nacional Argentino.** (Pág. 3.)
3. **Convocatoria a sesión especial.** (Pág. 3.)
4. **Homenaje al diputado Héctor Enrique Olivares.** (Pág. 3.)
5. **Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional.** (C.D.-31/19.) (Pág. 9.)
6. **Homenaje a María Eva Duarte de Perón.** (Pág. 9.)
7. **Emergencia productiva, económica, financiera y social en la provincia del Chaco. Moción de preferencia.** (S.-1.476/19.) (Pág. 10.)
8. **Cupo femenino y acceso de artistas mujeres a eventos musicales. Moción de tratamiento sobre tablas.** (S.-3.484/18.) (Pág. 11.)
9. **Manifestaciones de la señora senadora Odarda.** (Pág. 14.)
10. **Manifestaciones respecto del tratamiento de varios proyectos.** (Pág. 14.)
11. **Tratamiento de los pliegos de acuerdos. Moción de preferencia.** (Pág. 15.)
12. **Alteración del orden del día.** (Pág. 15.)
13. **Ejercicio profesional de la fonoaudiología. Moción de preferencia.** (S.-486/18.) (Pág. 16.)
14. **Cuestiones vinculadas a créditos hipotecarios. Moción de preferencia.** (S.-784/19 y S.-647/18.) (Pág. 16.)

15. **Emergencia económica en contratos de planes de ahorro. Moción de preferencia.** (S.-1.001/19.) (Pág. 17.)
16. **Creación del Juzgado Federal de Chilecito. Moción de preferencia.** (S.-1.734/18.) (Pág. 17.)
17. **Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Odarda.** (S.-1.532/19.) (Pág. 18.)
18. **Asuntos entrados.** (Pág. 18.)
19. **Solicitud de licencias de señores senadores.** (Pág. 18.)
20. **Mensajes solicitando acuerdos.** (Pág. 19.)
21. Informe realizado por la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA “San Juan”. (Pág. 20.)
22. **Consideración en conjunto de órdenes del día con proyectos de ley.** (Pág. 20.)

Creación del fondo fiduciario público “Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata”. (O.D. N° 135.)

Modificación del Código Penal y de la Ley de Protección Integral a las Mujeres (O.D. N° 136.)

Modificación de la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. (O.D. N° 137.)
23. **Modificación de la ley sobre la Cruz Roja Argentina. Moción de preferencia.** (C.D.-28/18.) (Pág. 29.)
24. **Creación del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.** (O.D. N° 169/19.) (Pág. 30.)
25. **Emergencia económica, productiva, financiera y social de la cadena de producción de cítricos de las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy, Salta, Buenos Aires y Catamarca.** (O.D. N° 170/19 y S.-1.424/19.) (Pág. 50.)
26. **Levantamiento de la sesión.** (Pág. 61.)

27. Apéndice

- I. **Convocatoria a sesión especial.** (Pág. 62.)
- II. **Actas de votación.** (Pág. 65.)
- III. **Asuntos entrados.** (Pág. 73.)
- IV. **Asuntos considerados y sanciones del Honorable Senado.** (Pág. 783.)
- V. **Inserciones.** (Pág. 815.)

– En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14:42 del miércoles 22 de mayo de 2019:

Sra. Presidente (Michetti). – Buenas tardes. La sesión especial está abierta.

1

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sra. Presidente (Michetti). – Invito al senador Julio Cobos a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.

– Puestos de pie los presentes, el señor senador Julio César Cleto Cobos procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (*Aplausos.*)

2

HIMNO NACIONAL ARGENTINO

Sra. Presidente (Michetti). – Continuamos de pie para entonar las estrofas del Himno Nacional.

– Puestos de pie, los presentes entonan las estrofas del Himno Nacional Argentino. (*Aplausos.*)

3

CONVOCATORIA A SESIÓN ESPECIAL

Sra. Presidente (Michetti). – Se incorporarán al Diario de Sesiones la nota de varios señores y señoras senadoras solicitando la convocatoria a esta sesión especial y el respectivo decreto dictado por esta Presidencia.¹

4

HOMENAJE AL DIPUTADO HÉCTOR ENRIQUE OLIVARES

Sra. Presidente (Michetti). – Para un homenaje, tiene la palabra el senador Julio Martínez.

Sr. Martínez, Julio César. – Señora presidenta: venimos a este recinto a rendir un sentido homenaje al amigo Héctor Olivares, el diputado que nos dejó en estos días en estos hechos desgraciados, cuyas imágenes han trascendido en el país y en el mundo, lo cual nos enlutó a todos: a toda la democracia, a todas las instituciones,

1. Ver el Apéndice.

solicitar licencia sin goce de dieta, desde el día 17 de mayo al 17 de junio de 2019 inclusive, con motivo del inicio oficial de la campaña electoral en mi provincia, ello conforme lo establecen los artículos 25 y 26 del Reglamento del Honorable Senado de la Nación. Sin más, saludo a la señora presidente con consideración y estima. Omar Perotti. Senador de la Nación.”.

“Señora presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciada Gabriela Michetti. Su público despacho. Me dirijo a usted a efectos de solicitar que la Honorable Cámara de Senadores me conceda, a partir del día de la fecha y hasta el 17 de junio del corriente licencia, que, expresamente, pido sea otorgada sin goce de haberes. Solicito esta licencia, con motivo de mi participación, en carácter de candidato a gobernador de la provincia de San Luis por el Frente San Luis Unido, en las elecciones a realizarse en mi provincia el próximo 16 de junio del corriente. Conforme lo expuesto, habiendo sido peticionada la licencia para llevar adelante una campaña electoral, y no por motivos de salud o por una comisión oficial, es que expresamente peticiono sea concedida sin goce de haberes. Saludo a usted con atenta y distinguida consideración. Claudio Poggi. Senador de la Nación.”.

“Señora presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciada Gabriela Michetti. De mi consideración: Tengo el agrado de dirigirme a usted, en carácter de senadora nacional por la provincia de Tucumán, a fin de solicitar la licencia sin goce de haberes desde el 20 de mayo al 10 de junio inclusive, con motivo del inicio de la campaña electoral en mi provincia, ello conforme lo establecen los artículos 25 y 26 del Reglamento del Honorable Senado de la Nación. Sin más, saludo a la señora presidente con mi consideración más distinguida. Silvia Elías de Perez. Senadora de la Nación.”.

Sra. Presidente (Michetti). – Vamos a votar, entonces, a mano alzada, los pedidos de licencias sin goce de sueldo.

– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Michetti). – Aprobados. Resulta afirmativo.¹

1. Ver Apéndice.

20

MENSAJES SOLICITANDO ACUERDOS

Sra. Presidente (Michetti). – Ahora sí, a continuación y por Secretaría, vamos a proceder a dar lectura de los mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdo a efectos de cumplimentar lo dispuesto por el artículo 22 del reglamento del Senado.

Sr. Secretario (Tunessi). – Expediente P.E.-89/19. Se solicita acuerdo para designar síndico adjunto del Banco Central de la República Argentina, al doctor Sergio Fabián Beros.

Nº 106/19. Acuerdo para designar jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 21, de la Capital Federal, a la doctora María Elisa Gaeta.

Nº 107/19. Acuerdo para designar conjueces de la Cámara Federal de Salta a los siguientes doctores: doctor Diego Martin Matteucci, doctora Amelia Pilar Parra y doctora Mariana Elizabeth Cervera.

Nº 108/19. Solicita acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 21 de la Capital Federal, a la doctora Alejandra García.

Nº 109/19. Acuerdo para designar defensor público de víctima con asiento en la provincia del Neuquén, al doctor Pedro Pugliese.

Nº 110/19. Solicita acuerdo para designar defensora pública oficial ante los Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Morón, provincia de Buenos Aires, Defensoría Nº 2, a la doctora Romina Alicia Magnano.

Nº 115/19, Mensaje 90. Solicitando acuerdo para designar defensora pública oficial ante los Tribunales Federales de Primera Instancia de La Plata, provincia de Buenos Aires, Defensoría Nº 2, a la doctora Ivana Verónica Mezzelani.

Nº 116/19. Solicita acuerdo para designar juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy, provincia del mismo nombre, al doctor Federico Aníbal Zurueta.

Nº 117/19. Solicita acuerdo para designar defensora pública de víctima con asiento en la provincia de Catamarca, a la doctora Mariana Beatriz Vera.

Nº 118/19. Acuerdo para designar defensora pública de víctima con asiento en la provincia de Córdoba, a la doctora Berenice Olmedo.

Nº 119/19. Acuerdo para designar defensor público de víctima con asiento en la provincia de Mendoza, al doctor Ramiro Dillon Villamayor.

Nº 125/19. Acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 11 de la Capital Federal, al doctor Claudio Matías Posdeley.

Nº 126/19. Solicita acuerdo para designar defensor público oficial adjunto de la Defensoría General de la Nación, al doctor Nicolás Laino.

Nº 127/19. Acuerdo para designar defensora pública de víctima con asiento en la provincia de San Juan, a la doctora Romina Laura Ronda.

Nº 133/19. Solicita acuerdo a fin de posibilitar el traslado del juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Paso de los Libres, provincia de Corrientes, al Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de Corrientes, provincia de Corrientes, doctor Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda.

Nº 134/19. Acuerdo para designar conjuces de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, provincia de Misiones, a los siguientes: doctor Carlos María Aranda Martínez, doctor Fabián Gustavo Cardozo, doctora Nieves María Cardozo, doctor Luis Andrés Villanueva.

Nº 135/19. Acuerdo para designar defensor público de víctima con asiento en la provincia de Salta, al doctor Carlos Nicolás Escandar.

Nº 136/19. Acuerdo para designar defensora pública oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, provincia del mismo nombre, a la doctora Vanessa Isabel Lucero.

Nº 137/19. Acuerdo para designar defensor público de víctima con asiento en la provincia del Chaco, al doctor Gustavo Adolfo Vargas.

Nº 138/19. Acuerdo para designar defensora pública oficial ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero, Defensoría Nº 2, a la doctora Mariana Cisneros Billaud.

Y Nº 139/19. Solicita acuerdo para designar Defensora pública curadora de la Defensoría General de la Nación, Defensoría Pública, Curaduría Nº 1, a la doctora Mercedes Robba.

Sra. Presidente (Michetti). – Gracias, secretario. Pasan a la Comisión de Acuerdos para su tratamiento.

21

INFORME REALIZADO POR LA COMISIÓN BICAMERAL ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE LA DESAPARICIÓN, BÚSQUEDA Y OPERACIONES DE RESCATE DEL SUBMARINO ARA “SAN JUAN”

Sra. Presidente (Michetti). – Corresponde someter al referendo de la Cámara el decreto DPP-35/19, dictado por esta Presidencia.

Señor secretario.

Sr. Secretario (Tunessi). – Es el DPP-35/19 que autoriza la impresión del informe realizado por la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA “San Juan”.

Sra. Presidente (Michetti). – Se pone a consideración del cuerpo. Si ningún senador o senadora tiene algo para decir, se vota a mano alzada.

– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Michetti). – Aprobado y queda refrendado.¹

22

CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE ÓRDENES DEL DÍA CON PROYECTOS DE LEY

Sra. Presidente (Michetti). – Corresponde el tratamiento del orden del día que por Secretaría vamos a mencionar.

Sr. Secretario (Tunessi). – De acuerdo a la moción, señora presidenta, corresponde, entonces, tratar en primer término el dictamen de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda. Dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se crea el fondo fiduciario público Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata. (Orden del Día Nº 135)

Se tratará en conjunto con el Orden del Día Nº 136, comisiones de Justicia y Asuntos Penales y Banca de la Mujer. Dictamen en el proyecto de ley de las señoras senadoras Kunath y Durango por el que se modifica el Código Penal

1. Ver Apéndice.

y la ley de protección integral a las mujeres; y con el Orden del Día N° 137, dictamen de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, Banca de la Mujer y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley de la señora senadora Mirkin, por el que se modifica la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Sra. Presidente (Michetti). – ¿Alguien pidió la palabra?

Tiene la palabra la senadora Kunath.

Sra. Kunath. – Gracias, presidenta.

En relación con estos temas, y también incorporando el tema al que ya dimos media sanción sobre la inclusión de nuestras músicas en los escenarios, voy a fundamentar muy brevemente el Orden del Día N° 136 –que tiene relación con un proyecto de mi autoría, que ha sido acompañado por la senadora Durango– y, muy brevemente también, el del fondo fiduciario para víctimas de trata.

Nosotros venimos nuevamente a proponer esta modificación del Código Penal y de la ley 26.485. Digo “nuevamente” porque este tema ya fue tratado en el Senado, recibió media sanción y perdió estado parlamentario en Cámara de Diputados. Hemos logrado nuevamente el tratamiento en comisión y el dictamen favorable; y lo que venimos a proponer es la modificación del Código Penal para que dentro de la tipificación de la desobediencia haya un tipo específico que tenga que ver con la desobediencia de aquellas medidas que comúnmente conocemos como restricciones perimetrales, que son dictadas en el marco de la protección de las mujeres víctimas de violencia de género. La propuesta es muy simple: lo que proponemos es establecer como un tipo específico y con una pena más gravosa de lo que ya indica el artículo pertinente en el abordaje del delito de desobediencia.

Nos parece que este es un tema sobre el cual tenemos que prestar muchísima atención, no solamente en términos estadísticos, sino también en términos que nos preocupan, y nos preocupan muchísimo. Leíamos últimamente ciertas notas periodísticas que tienen que ver con la violación de estas restricciones perimetrales, que cada vez son más frecuentes. Leíamos también sobre lo que pasa con los dispositivos duales –también

esto está previsto dentro de nuestra agenda–, que tiene que ver con dispositivos que son utilizados tanto en el victimario como en la víctima, pero también con lo que pasa cuando estas restricciones perimetrales son violadas.

Veíamos también hace muy poco en mi provincia, en Entre Ríos, que un agresor ya denunciado y con una restricción perimetral vigente viola esta medida y, literalmente, incrusta su vehículo en el domicilio, en el comercio de su ex pareja. Veíamos también hace poco cómo un agresor mata a su ex pareja en ocasión de encontrarse en una fiesta, también violando la restricción perimetral. Estos son casos que, lamentablemente, forman parte del paisaje con el que nos encontramos en el abordaje para el tratamiento y la prevención de la violencia de género.

Con esta medida, que nosotros consideramos necesaria y cuyo abordaje consideramos también interesante en cuanto a la tipificación específica y la modificación de la ley 26.485, claramente lo que pretendemos es tener mayores medidas que sean preventivas de los femicidios o de situaciones más graves y que ya son preexistentes. Porque en este caso estamos hablando de denuncias que suponen una instancia judicial y de medidas que son dictadas por un juez o jueza en protección de estas mujeres. Por lo tanto, frente a la violación habitual de estas medidas de restricción dictadas dentro de un proceso en el marco de la ley de protección integral hacia la mujer es que hacemos esta propuesta.

Quiero, nuevamente, solicitar a este Senado el acompañamiento para la inclusión de este tipo penal con una pena más agravada, atendiendo, insisto, a que esto fue aprobado por unanimidad oportunamente. Nuevamente lo ponemos a consideración del Senado.

Esto también lo tratamos hoy en ocasión del trabajo en comisiones con distintas medidas o distintas agendas que se viene planteando tanto en Banca de la Mujer como en las distintas comisiones, que tienen que ver con un abordaje integral, con una mirada integral, pero claramente de prevención, especialmente en estos casos donde ya hay un llamado de atención, donde ya hay una alerta. Es decir, tratar a los distintos casos de violencia de género y según la magnitud, según la preexistencia de denuncias

y según también la preexistencia de medidas de restricción creo que la mirada debe ser mucho más atenta, y por eso es que venimos a hacer este planteo.

En segundo lugar, presidenta, en relación con el fondo fiduciario para víctimas de trata, la verdad es que también venimos planteando y trabajando en un sentido de acompañamiento a esta propuesta. La hemos tratado en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda. Yo acompaño, la verdad, con mucho entusiasmo que podamos avanzar en la creación de este fondo, que viene a cumplir con una manda legal que ya tenemos vigente en nuestro Código Penal, pero especialmente viene a cumplir con lo que establece la ley 26.364, de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. Con esto lo que nosotros vendríamos a completar es la creación de un fondo fiduciario que sea de manera específica y –también lo conversábamos– de fácil disponibilidad, para que sea destinado precisamente a lo que la ley establece.

Yo quiero destacar el rol que ha tenido en poder concretar este proyecto el Consejo Federal de Trata, que es un ámbito plural y participativo donde están representadas todas las provincias, distintos estamentos del gobierno nacional y también organizaciones no gubernamentales, que tienen un aporte y una mirada sumamente sensible para el abordaje de esta temática.

Creo que también es necesario que trabajemos en conjunto en la prevención de este delito, que parece increíble que a esta altura de la civilización exista. Un delito que vulnera de manera atroz los derechos de las mujeres, especialmente; que vulnera también este derecho a poder elegir y a poder vivir una vida libre de violencias, pero que además tiene una finalidad de explotación sexual o de explotación laboral. Esto, la verdad, nos parece verdaderamente increíble que suceda, pero forma parte también de nuestra realidad.

Por lo tanto, más allá de la creación de este fondo, que vamos a acompañar con algunas sugerencias que seguramente hará el senador Pais –tal como quedamos en el plenario de comisiones– para poder avanzar en este sentido, creo que también viene a reparar de algún modo lo que se viene trabajando y que necesariamente necesita que avancemos con esta ley.

Muchas gracias, presidenta.

Sra. Presidente (Michetti). – Gracias a usted, senadora.

Tiene la palabra la senadora Durango.

Sra. Durango. – Gracias, presidenta.

Como presidenta de la Banca de la Mujer, celebro el tratamiento de estas cuestiones importantes para la garantía de los derechos que atienden las problemáticas de las mujeres.

Como todos sabemos, la trata de personas con fines de explotación sexual es una flagrante violación a los derechos humanos. Y también sabemos –o por lo menos lo decimos aquí, en este recinto– que los hombres de verdad no compran mujeres.

Este es el caso del proyecto de ley de creación del fondo de asistencia directa a las víctimas de trata; un fondo fiduciario –como bien dijo la senadora Kunath– que dispone asistir económicamente a las víctimas de este delito. Sus recursos provendrán de los bienes decomisados en los procesos relacionados con el delito de trata y explotación de personas y de lavado de activos provenientes de ilícitos con sentencia firme.

De este modo, la víctima no deberá asumir necesariamente un rol activo a través del impulso de una acción civil ordinaria, sino que la reparación económica –y esto es lo interesante– será de carácter obligatorio, debiendo estar prevista en la sentencia. Igualmente, esto no impide la posibilidad de realizar una acción civil por parte de las víctimas.

Será administrado –como también se dijo– por un consejo federal para la lucha contra la trata y explotación de personas, y estará eximido de las retenciones impositivas actuales y futuras.

Todas estas acciones contribuyen a promover el restablecimiento físico, psicológico y social de las personas víctimas de trata, que, como usted sabe, es devastador, y siempre son bienvenidas. El objetivo primordial debe ser la reparación de una de las experiencias más traumáticas que puede vivir una mujer; y contribuir al empoderamiento personal de las personas víctimas es la única manera de mejorar las condiciones de una existencia signada por esta experiencia terrible que es la trata para la explotación sexual.

También estamos debatiendo otros proyectos. Aprovecho la oportunidad para pedirles que, cuando se haga el orden del día, se pongan todos juntos los proyectos relacionados con la problemática de la mujer, para que, cuando nosotros los justifiquemos, lo podamos hacer para todos juntos, como en este caso.

El incumplimiento de las resoluciones judiciales en protección de las víctimas de violencia de género es el que tipifica la desobediencia de las resoluciones judiciales dictadas en protección de las víctimas de violencia de género al tiempo que se propicia la elevación del mínimo y del máximo de la pena toda vez que el incumplimiento configure desobediencia u otro delito represente un peligro para la salud o para la vida de la víctima de violencia o de sus hijas.

También estamos tratando el de las tobilleras electrónicas de la senadora Mirkin que, como ustedes saben, está ausente. Y en ese marco de los procesos de violencia familiar, particularmente en aquellos valorados de alto riesgo, es viable que se le otorgue a la mujer judicialmente una medida de protección complementaria como es la tobillera electrónica. Este es un cambio de paradigma. Si bien con el botón antipánico es la mujer quien debe estar en estado de alerta constante, el cambio de paradigma nos dice que con la tobillera será el violento quien debe estarlo, trasladándole a él la carga.

Finalmente, hemos votado la ley de más mujeres en los escenarios.

Simplemente, quiero decir que para una mujer la vida no es nada fácil y lo importante del proyecto de ley que hoy votamos es un reclamo laboral, un acceso al trabajo y, en realidad, es mucha más justicia porque necesitamos que en todos los festivales haya, al menos, un 30 por ciento de mujeres que también puedan cantar lo que piensan.

Gracias, señora presidenta.

Sra. Presidente (Michetti). – Tiene la palabra la señora senadora Verasay.

Sra. Verasay. – Señora presidente: para reforzar los conceptos vertidos por las colegas, porque la verdad es que los tres proyectos han sido trabajados de manera consensuada y siempre con una actitud de aporte y de mejora, quiero sintetizar el proyecto que trata sobre la creación del fondo fiduciario.

Me parece que aquí la idea central tiene que ver con que, justamente, los bienes que provienen de ese enriquecimiento como es el delito de trata sean dirigidos de manera directa a la víctima. Por ahí el mensaje que nos debemos llevar hoy es que, justamente, esos bienes decomisados no van a ir a cualquier dependencia u oficina del Estado sino que es el mismo Estado el que los protege efectivamente para destinarlos a la reparación de la víctima de trata considerando a la trata como un delito tan duro y tan complejo. Digo, viola todos los derechos humanos y no solamente acá nos sumergimos al tema de género. Trata también son niños. Trata también es toda la problemática que requiere este delito tan complejo.

Poner énfasis en eso. Poner énfasis en lo que decía la senadora Kunath porque, seguramente, va a haber algunas modificaciones sobre la parte procedimental y en cuanto a las modificaciones del Código Penal, que también van en sintonía con este tema de género que proponía la senadora Kunath, acompañar desde el Interbloque la modificación de las penas para aquellos que violen el artículo 239 del Código Penal.

Finalmente, cuando hablamos del proyecto de las pulseras para georreferenciación del delincuente –creo que es de la senadora Mirkin–, si bien esto es algo que los ejecutivos en general lo vienen trabajando de manera local –de hecho, ella tiene su experiencia en la provincia de Tucumán– nunca está de más reforzar esto en una ley para darle contenido y estabilidad a la política en materia de protección de género.

Gracias, señora presidenta.

Sra. Presidente (Michetti). – Tiene la palabra la señora senadora Catalfamo.

Sra. Catalfamo. – Señora presidente: en primer lugar, quiero aclarar que me voy a referir específicamente a dos proyectos que tienen que ver con la temática de violencia de género y con la incorporación, que celebro, de creación del fondo fiduciario para víctimas de trata, además del proyecto de la senadora Fernández Sagasti por el que se otorga el cupo femenino para espectáculos musicales.

Los proyectos que mencionaba referidos a violencia de género hoy los debatimos gracias a la insistencia de las senadoras autoras de los proyectos y darán una respuesta o una solución

a miles de mujeres que todos los días en nuestro país sufren violencia de género.

En la última sesión logramos incorporar tanto el acoso callejero como la violencia política como formas de violencia contra la mujer. Y hoy con estos proyectos, por un lado, se busca promover el uso de los dispositivos electrónicos para que se dé un alerta en caso de violación perimetral si es que la Justicia lo estableció para un agresor y, por otro lado, se busca endurecer las penas para aquellos que hayan desobedecido una resolución judicial en el marco de procesos de violencia familiar o violencia de género.

Ambos proyectos tienen que ver, en un caso, con la prevención y en el otro con el agravamiento de penas, y lo que se busca es dar una solución a miles de mujeres que sufren esta tragedia todos los días en nuestro país.

Solamente el año pasado se registraron 281 femicidios, de los cuales en 55 casos la víctima avisó con antelación, al menos, una vez; es decir que el 20 por ciento de estos 281 femicidios podrían haber sido evitados. Y en lo que va de 2019 ya se han registrado 87 víctimas fatales. Es decir que las mujeres seguimos siendo noticia en los distintos medios de comunicación, pero, lamentablemente, no por nuestros logros personales o profesionales sino porque nos matan y muchas veces parece que estos temas no son prioritarios.

Claramente, se trata de una tragedia nacional donde los legisladores tenemos una función fundamental, donde debemos ponernos en la cabeza de estos temas, debemos intervenir, debemos dar respuestas concretas, efectivas y rápidas. Debemos estar, básicamente, a la altura de una sociedad que nos pide un abordaje integral de este tema, de la violencia de género y de llevar adelante políticas que tiendan a la igualdad. Pero para eso también es necesario que como legisladores tengamos empatía en este tema, que se entienda que verdaderamente es una tragedia nacional y que esta lucha que las mujeres llevan adelante por ser reconocidas y por ser escuchadas se logre y se den cuenta que hasta que no esté el último objetivo propuesto no se va a dejar de luchar.

Hoy por hoy, este Senado se encuentra abarrotado de proyectos de género que hemos presentado todos nosotros. Y la verdad es que no están siendo tratados y se debe, en muchas

ocasiones, a que los giran a tantas comisiones que es imposible que puedan reunirse los plenarios para ser tratados.

Miren, particularmente presenté tres proyectos que tienen que ver con esto. Uno busca la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres –el 875/18–, otro que busca la igualdad de trato hacia personas travestis y transexuales –el 876/18– y, finalmente, otro que trata sobre el régimen de jubilación para trabajo doméstico –877/18–. Ni siquiera he tenido la oportunidad de que mis colegas conozcan estos proyectos porque, al no ser tratados en comisión o girarse a tantas comisiones como mencioné, ellos no pueden aportar para poder armar mejores proyectos.

Entonces, la verdad es que, solidariamente, a través de este discurso solicito que esto se haga.

Me parece que el Poder Ejecutivo nacional no está tomando estos temas en serio. Muere una mujer cada treinta horas en nuestro país y, como dije anteriormente, los legisladores debemos estar a la altura de los nuevos tiempos. Debemos apoyar con mayor firmeza a los colectivos femeninos, a las organizaciones y asociaciones de mujeres que han tomado tantísima relevancia en la agenda pública, social y política en nuestro país.

Entiendo que esta no es una tarea fácil porque hay intereses culturales y sociales y cuesta mucho que exista una transformación en esto y lleva mucha militancia. Pero siempre aprovechando el lugar en el que estoy, como joven peronista y militante voy a intentar que las iniciativas de género sean tenidas en cuenta.

Espero que en los próximos tiempos en este Senado se puedan incluir temas de género. Quizás en los próximos meses también haya una presidenta de este cuerpo que nos ayude a involucrarnos y que las mujeres sean realmente defendidas.

Muchas gracias.

Sra. Presidente (Michetti). – Gracias, senadora.

Tengo un pedido de palabra de la senadora Giacoppo. Es la última que va a hablar en este tema. Lo digo para que vayan volviendo los senadores que están afuera.

Adelante, senadora.

Sra. Giacoppo. – Señora presidenta: en primer lugar, quiero agradecer a los caballeros que se quedaron en el recinto cuando comenzamos a hablar de las cuestiones de género, de estos grandes proyectos.

Luego, quiero agradecer especialmente a la senadora Kunath, quien preside la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, porque siendo parte del Consejo Federal de Trata tomó este tema como una gran bandera y logró que podamos dictaminar y podemos hoy estar debatiéndolo en el recinto. Esto rompe aquellos paradigmas de que hay muchos temas que pasan la política, señora presidenta. Estos son temas que nos atañen y nos sensibilizan a todas. A esta sociedad, que hoy tiene la oportunidad de debatir.

Y sobre todo quiero agradecer al Poder Ejecutivo, el cual ha sido el que propulsa este proyecto, porque ingresa por esta Cámara y viene a través de un estudio y de un trabajo hecho durante estos dos años de existencia del Consejo Federal, en el cual participan todas las áreas gubernamentales: desarrollo humano, el Ministerio de Justicia, organizaciones no gubernamentales, y tiene representación el Congreso. Y este trabajo fue muy visibilizado en toda la sociedad.

Cuando el Consejo Federal presentó el protocolo en la Cámara de Diputados, pudimos ver qué percepción tuvo y la necesidad de contar con recursos. Porque las buenas voluntades, en todos los ámbitos y organismos del Estado, cuando no están acompañadas de recursos, no pueden funcionar como todos quisiéramos.

Y como bien decían aquellas colegas que me precedieron en el uso de la palabra, la violencia de género vino para quedarse. Se hacen acciones en todo el país, pero los índices son alarmantes.

Entonces, celebro mucho que hoy podamos votar este proyecto, que va a tener media sanción, y que en espejo se lo estuvo mostrando y presentando en la Cámara de Diputados, para que esto sea ley y los recursos provenientes de este delito tan aberrante como la esclavización de la mujer puedan ser utilizados para reparar a esas víctimas y para que luego aquellas que tuvieron la suerte de ser recuperadas puedan reinsertarse y curar sus heridas, que en muchos casos llevan mucho tiempo. Y en algunos casos, esas heridas son irreparables. Porque esa mujer tiene que reinsertarse en una sociedad que no

está preparada, muchas veces, para mirarla como víctima, sino como culpable y víctima. Esa sociedad tiene que recibirlas con una vivienda, reinsertarlas en un trabajo y lograr que puedan volver a recuperar la dignidad.

Por eso, señora presidenta, estamos cumpliendo con este protocolo de Naciones Unidas y estamos cumpliendo hoy con esta sanción, dotando al Consejo Federal de los recursos que van a provenir –según nuestro Código Penal– de aquellos decomisos de esos bienes.

Realmente, es un día para festejar; un día para que la Argentina vea que en esta Cámara, cuando existen temas tan importantes, tenemos la capacidad de unirnos y de compartir estos logros.

Gracias, señora presidenta.

Sra. Presidente (Michetti). – Al contrario, gracias a usted, senadora.

POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA KUNATH

Señora presidente:

Nos ocupa en esta oportunidad el tratamiento de un proyecto de ley recientemente dictaminado por las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, que tiene por objeto la creación de aquellos mecanismos y esquemas reparatorios para que las personas víctimas de trata y explotación puedan obtener la tutela y asistencia que el ordenamiento jurídico les confiere por su calidad de tal.

Esta es una iniciativa que reconoce sus orígenes en el trabajo llevado adelante desde el Consejo Federal para la Lucha contra la trata, organismo que cuenta con representación de las provincias, de los distintos poderes del Estado y de organizaciones de la sociedad civil. En este sentido (y, si bien el proyecto en particular proviene de un mensaje del Poder Ejecutivo remitido a este Senado) es preciso señalar que se trata de una iniciativa que, por la magnitud de la problemática que intenta abordar, se encuentra presente en la agenda de manera transversal y de forma independiente a los espacios políticos de los que formamos parte.

Cuando hablamos de trata de personas estamos haciendo referencia a una grave violación de los derechos humanos, por tratarse de una actividad con fines de explotación logradas a través de medios que se basan en la vulnerabilidad de las víctimas, siendo que estas son engañadas y obligadas a transitar situaciones en contra de su voluntad y en condiciones de esclavitud.

En definitiva, se trata de una problemática compleja y clandestina que la vemos expresada a través de distintas formas. Si bien la modalidad de trata con fines de explotación sexual es la más extendida, también existen otras modalidades como la trata laboral, que se ocupa

de arrastrar a trabajadoras y trabajadores, en ocasiones junto a sus grupos familiares, para mantenerlos en cautiverio mientras son explotados en tareas agrícolas o en talleres textiles, entre otras actividades.

Por ello, y tal como se afirmara en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en el año 1993, la trata es una violación a los derechos fundamentales de las personas ya que vulnera el derecho a la vida, la libertad, la dignidad, la igualdad, la seguridad personal y, en especial en los niños, niñas y adolescentes.

La trata de personas es una problemática que en este parlamento ha tenido un largo recorrido legislativo. Ya en el año 1913 por iniciativa del legislador Alfredo Palacios se sancionaba la ley 9.143 por la cual se penalizaba la explotación de la prostitución de mujeres y niñas.

Asimismo, nuestro Código Penal reprimía a la “trata de personas para ser explotadas en la prostitución” en los artículos 127 bis y 127 ter, hoy derogados. Posteriormente, la ley 26.364 contra la trata de personas sancionada en el año 2008 comprendió a la trata de personas para ser sometidas a distintas formas de explotación y no solo a la trata con fines de explotación sexual. Por último, en el año 2012 mediante la sanción de la ley 26.842 se dio un nuevo texto a los artículos 145 bis y 145 ter, que son los que actualmente tipifican el delito de trata de personas para su explotación y sus formas agravadas.

Cabe también destacar que forma parte de esta evolución normativa la sanción en el año 2015 de la ley 27.206 de respeto a los tiempos de las víctimas, en virtud de la cual se introdujo una reforma a las reglas de la prescripción de los delitos previstos en el Código Penal, colocando al delito de trata y sus formas agravadas en una situación diferencial respecto del resto de los delitos. Así, a partir de esa norma para los casos de trata y de abuso sexual infantil, la prescripción se suspenderá mientras la víctima sea menor de edad y hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoría de edad. Sin dudas se trata de un régimen tuitivo de los derechos de las víctimas, que tiene por objeto garantizar el derecho al acceso a la justicia independientemente del transcurso del tiempo.

Con anterioridad, al abordaje en particular de las disposiciones del proyecto que nos ocupa, y a los efectos de un mejor entendimiento, debemos mencionar que el artículo 23 del Código Penal al referirse al decomiso, establece entre otras cosas que cuando existiera el delito de trata, los bienes decomisados serán afectados a programas de asistencia a la víctima. Por su parte, la ley 26.364, de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas (anteriormente referida), dispone que los decomisos tendrán como destino específico un fondo de asistencia directa a las víctimas que será administrado por el Consejo Federal para la

Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.

Por ello y teniendo en cuenta que esas normas ya forman parte de nuestro derecho positivo, esta iniciativa viene a darle operatividad a aquellas disposiciones y a hacer efectiva la asistencia a las víctimas de este aberrante delito.

En primer término, crea un fondo fiduciario público denominado “Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - ley 26.364” conformado como un fideicomiso de administración destinado a la asistencia directa a víctimas del delito de trata y explotación de personas.

Los bienes fideicomitidos serán aquellos decomisados en procesos relacionados con los delitos de:

1. Trata y explotación de personas.
2. Lavado de activos provenientes de tales delitos.

Cabe aclarar que para ello la sentencia deberá estar firme, o bien el juez de la causa deberá haber autorizado la venta.

A través de una modificación a la ley 26.364, se establece que en esos casos, la sentencia condenatoria o decisión judicial equivalente (suspensión del proceso a prueba, admisión de juicio abreviado, decomiso anticipado de bienes) deberá ordenar las restituciones económicas que correspondan a la víctima, como medida destinada a reponer las cosas al estado anterior a la comisión del delito.

En definitiva, se trata de una previsión que posibilita establecer un cálculo de los provechos obtenidos por los tratantes o explotadores, como así también de la afectación sufrida por las víctimas. En este sentido, las liquidaciones de los bienes tendrán la finalidad de restituir a las víctimas.

Asimismo, si los recursos no fueran suficientes podrá recurrirse al fondo fiduciario para obtener la restitución. Por el contrario, si producto de las actividades ilícitas se obtuvieran excedentes, es decir, montos superiores a las restituciones directas, esos recursos irán al fondo fiduciario para poder satisfacer a eventuales víctimas en otros casos en donde los recursos obtenidos no hubieran resultado suficientes.

En consecuencia, los recursos que compongan el fondo fiduciario deberán ser destinados a:

1. Asistencia directa a víctimas:

La ley 26.364 a lo largo de todo su articulado, y fundamentalmente en el artículo 6º enumera distintas formas de asistencia directa. Entre ellas se destacan el derecho a recibir asistencia psicológica y médica gratuita, a recibir alojamiento apropiado, manutención, alimentación suficiente y elementos de higiene personal, a recibir capacitación laboral, patrocinio jurídico gratuito, etcétera.

2. Restituciones económicas:

Que pudieran corresponder a una víctima, siempre que no hubieran podido ser satisfechas con los bienes decomisados al condenado en la causa respectiva.

Por estos motivos, considero absolutamente necesario avanzar sin dilaciones en la creación de este fondo que permita disponer con mayor flexibilidad y liquidez de los recursos que allí se encuentren.

Tal como se nos informará en el plenario de comisiones que abordó esta iniciativa, en la actualidad existen 1.250 víctimas de trata y explotación declaradas por jueces en sentencias condenatorias. De todas ellas, solo una ha logrado obtener una reparación integral, lo que da cuenta de la gravedad de la situación.

Es por esto que desde el Congreso debemos generar aquellas herramientas que permitan dar una respuesta a las víctimas de estos aberrantes delitos que, por sus propias características, son personas que generalmente se encuentra con condiciones de extrema vulnerabilidad.

Sra. Presidente (Michetti). – Vamos a identificarnos. Hay cinco senadores o senadoras sin identificar. Ahora hay cuatro...

Sr. Secretario (Tunessi). – Pichetto, Mirkin, Giacompo...

Sra. Presidente (Michetti). – Aguilar.

– Luego de unos instantes:

Sra. Presidente (Michetti). – Faltan dos: Naidenoff y Fuentes...

Senador Rozas también...

Sr. Secretario (Tunessi). – Están todos identificados.

– Los dictámenes en consideración, cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son los siguientes:

Creación del fondo fiduciario público Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata. (O.D. N° 135).

Modificación del Código Penal y de la Ley de Protección Integral a las Mujeres (O.D. N° 136).

Modificación de la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. (O.D. N° 137).

– Luego de unos instantes:

Sra. Presidente (Michetti). – Ahora sí, entonces, vamos a votar. No todos los proyectos juntos, porque había uno de ellos que tenía pedido de...

Sr. Secretario (Tunessi). – En general el 135...

Sra. Presidente (Michetti). – Por eso, entonces vamos a votar los que no tienen el pedido de modificación. ¿Cuáles son?

Sr. Secretario (Tunessi). – El 136 y el 137, en general y en particular.

Sra. Presidente (Michetti). – Perfecto: 136 y 137 en general y en particular; vamos a votar eso ahora.

– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para los órdenes del día 136 y 137...

Sra. Presidente (Michetti). – Perdón, la senadora Fernández de Kirchner consigna su voto positivo...

Sr. Secretario (Tunessi). – Entonces, 47 votos afirmativos –46 en la pantalla y uno a viva voz–; cero voto negativo y cero abstenciones. Unanimidad.

Sra. Presidente (Michetti). – Por unanimidad.

– El resultado de la votación surge del Acta N° 3.¹

Sra. Presidente (Michetti). – Vamos a votar ahora en general el 135, para que después en particular el senador haga su propuesta.

Se va a votar el Orden del Día N° 135, en general.

– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sra. Presidente (Michetti). – ¿Quién falta?

Sr. Secretario (Tunessi). – Aguilar.

– Continúa la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para el Orden del Día N° 135: afirmativos 47 votos; negativo cero voto; y cero abstención. En general, por unanimidad.

– El resultado de la votación surge del Acta N° 4.²

Sra. Presidente (Michetti). – Vamos ahora al tratamiento en particular.

El senador Pais tiene alguna consideración para formular.

Sr. Pais. – Gracias, presidenta.

En relación al artículo 3°, vamos a proponer una modificación. En principio, esto fue analizado en el seno de la comisión. Había que estudiar específicamente del texto la expresión

1. Ver Apéndice.

2. Ver Apéndice.

que menciona el segundo párrafo: en aquellos casos en que las restituciones a víctimas de los delitos mencionados en el párrafo anterior no hayan podido ser satisfechas con los bienes decomisados al condenado en la causa respectiva, el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas deberá utilizar los recursos del Fondo de Asistencia. Y sigue la norma.

Esa expresión de restitución, que merecía una aclaración porque justamente es a los fines de asistir a las víctimas, en términos jurídicos se invocó el artículo 29 del Código Penal, parte general. Pero dicha norma, tanto jurisprudencia como doctrina, la asimilan más a la recomposición al estado anterior. Y no prevé acciones específicas, que sí prevé la ley 26.364. Y coincidentemente los funcionarios del Ministerio Público debieron reconocer que esencialmente nos estamos refiriendo a las diferentes asistencias que regula el artículo 6° de la ley 26.364.

Me voy a permitir leerlas, para que sepamos lo que vamos a votar y para que conste en el Diario de Sesiones que estamos haciendo esta votación en esos términos: el Estado nacional garantiza a la víctima de los delitos de trata o de explotación de personas los siguientes derechos, con prescindencia de su condición de denunciante o querellante en el proceso penal correspondiente y hasta el logro efectivo de las reparaciones pertinentes. A) Recibir información sobre los derechos que le asisten en su idioma y en forma accesible a su edad y madurez de modo tal que se asegure el pleno acceso y ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales que le correspondan. B) Recibir asistencia psicológica y médica gratuitas con el fin de garantizar su reinserción social. C) Recibir alojamiento apropiado, manutención, alimentación suficiente y elementos de higiene personal. D) Recibir capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo. E) Recibir asesoramiento legal integral y patrocinio jurídico gratuito en sede judicial y administrativa en todas las instancias. F) Recibir protección eficaz frente a toda posible represalia contra su persona o su familia, quedando expeditos, a tal efecto, todos los remedios procesales disponibles a tal fin. En su caso, podrá solicitar su incorporación al Programa Nacional de Protección de Testigos

en las condiciones previstas por la ley 25.764. G) Permanecer en el país, si así lo decidiera, recibiendo la documentación necesaria a tal fin. En caso de corresponder, será informada de la posibilidad de formalizar una petición de refugio en los términos de la ley 26.165. H) Retornar a su lugar de origen, cuando así lo solicitare; en los casos de víctima residente en el país que, como consecuencia de delito padecido, quisiera emigrar, se le garantizará la posibilidad de hacerlo. I) Prestar testimonio en condiciones especiales de protección y cuidado. J) Ser informada del estado de las actuaciones de las medidas adoptadas y de la evolución del proceso. K) Ser oída en todas las etapas del proceso [...] y a la protección de su identidad e intimidad. M) A la incorporación de las exenciones del sistema educativo.

En estos términos es la restitución que prevé la norma y el fondo tiene que asignar los recursos para ello. Y no es la restitución del artículo 29. Y es coincidente...

Y esto sí porque, a raíz del desafío que nos planteó la respuesta que nos dio el Ministerio Público, debo mencionar que existe una norma de derecho internacional, que es la resolución número 60/147 de la Asamblea de Naciones Unidas del 16 de diciembre de 2005, que votaran los representantes de la República Argentina, que en el punto 19 expresamente prevé la restitución en los términos que nosotros ahora estamos legislando con esta ley. Dice así:

“19. La restitución, siempre que sea para la víctima de trata. Es una resolución de los principios y directrices básicos para el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y las violaciones graves del derecho internacional humanitario, a interponer recursos y obtener reparaciones.”

Esta norma de derecho internacional dice: “La restitución. Siempre que sea posible, ha de devolver a la víctima a la situación anterior a la violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o a la violación grave del derecho internacional humanitario. La restitución comprende, según corresponda, el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y de la ciudadanía, el regreso a su lugar

de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes.”

Con este concepto amplio es que, justamente, la finalidad esencial y principal de este fondo fiduciario es la que se incorpora ahora expresamente en el artículo 3° que pedimos que por Secretaría se lea.

Sra. Presidente (Michetti). – Adelante, secretario.

Sr. Secretario (Tunessi). – El artículo 3°, que propone modificar... Es el segundo párrafo del artículo 3°, que quedará redactado de la siguiente manera: “En aquellos casos que la asistencia directa a las víctimas y las reparaciones previstas en el artículo 6° de la ley 26.364 no hayan podido ser satisfechas con los bienes decomisados al condenado en la causa respectiva, el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, y para la Protección y Asistencia a las Víctimas deberá utilizar los recursos del Fondo de Asistencia directa a las víctimas de trata –ley 26.364– para cubrir tales situaciones de forma prioritaria”.

El resto de los artículos, presidenta, son del dictamen: iguales.

Sr. Pichetto. – ¡Esperemos que se cumpla la ley!

Sra. Presidente (Michetti). – Senador: ¿me pide la palabra?

Sr. Pichetto. – No.

Sra. Presidente (Michetti). – Perfecto.

Entonces, ahora vamos a hacer la votación en particular de manera electrónica: todos artículos, con la reforma que propuso el senador Pais.

Falta identificar el senador Basualdo. ¿Se puede identificar?

Sr. Secretario (Tunessi). – Faltan votar los senadores Rozas, Boyadjian, Romero y Blas.

– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – En particular, Orden del Día N°135, se registraron 49 votos afirmativos, 0 votos negativos y 0 abstenciones. Unanimidad.

– El resultado de la votación surge del Acta N° 5.¹

Sra. Presidente (Michetti). – Perfecto.

Entonces, ahora, secretario, ¿con cuál vamos a seguir?

Sr. Secretario (Tunessi). – Volvemos al orden del día...

Sra. Presidente (Michetti). – Al orden del día anterior.

23

MODIFICACIÓN DE LA LEY SOBRE LA CRUZ ROJA ARGENTINA. MOCIÓN DE PREFERENCIA (C.D.-28/18)

Sra. Presidente (Michetti). – Senadora Fernández de Kirchner, tiene la palabra.

Sra. Fernández de Kirchner. – Señora presidenta: muchas gracias.

Sé que durante el transcurso de la sesión especial hemos debido apartarnos en dos oportunidades para el tratamiento de cuestiones que ya habían precluido, o bien no podían considerarse porque estábamos en una sesión especial.

Acabo de estar en mi despacho –habían pedido audiencia– con el doctor Francesco Rocca, que es el presidente de la Cruz Roja Internacional; el vicepresidente, que es el venezolano doctor Miguel Villarroel; y el presidente de la Cruz Roja Argentina, doctor Diego Tipping. Vinieron a solicitar si se pudiera tratar un proyecto que, en realidad, ya tiene media sanción de Diputados desde el año pasado –media sanción de Diputados–, sobre una modificación a la vieja ley de la Cruz Roja Argentina, que data del año 1893. Y, la verdad, es que fue sancionada por unanimidad en la Cámara de Diputados va a hacer casi un año.

Hoy está en tres comisiones de nuestro Senado: en la de Legislación General, en la de Población y Desarrollo Humano, y en la de Presupuesto y Hacienda. La idea es ver si podemos votar, primero, un apartamiento del Reglamento; y, en segundo término, una preferencia para la próxima sesión de esta media sanción por unanimidad –reitero–, nada más ni nada menos que de la Cruz Roja Internacional.

Quiero recordar a todos y a todas que, más allá de lo que esto significa –es una organización reconocida y protegida por el derecho internacional–, fue precisamente la que tuvo una activa y decisiva intervención en la identificación de

1. Ver Apéndice.

hacemos por razones valederas, y yo siempre acompaño, pero cuando veo que en realidad ese pedido tiene una cuota de picardía tenemos que votar en contra de la alteración.

Ojalá encontremos quórum. Ojalá vuelvan y tengamos quórum. Por ahora no lo tenemos.

Sra. Presidente (Michetti). – Pero, senador: yo no le negué la palabra. Solo se hizo la lectura del reglamento, nada más; y después tuvo la palabra. Podría haber explicado perfectamente. No se la negué.

– Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Tunessi). – Senador Mera: si se identifica, así tenemos uno más.

Sra. Presidente (Michetti). – Nos faltan tres.

– Luego de unos instantes:

Sra. Presidente (Michetti). – Faltan dos.

– Luego de unos instantes:

Sra. Presidente (Michetti). – Senadores y senadoras: me parece que estamos complicados. Así que el resto de los temas quedarán para la próxima sesión, lamentablemente.

Muchísimas gracias por todo.

– Son las 19:22.

JORGE A. BRAVO

Director General de Taquígrafos

27

APÉNDICE

I

CONVOCATORIA A SESIÓN ESPECIAL

Buenos Aires, 17 de mayo de 2019.

A la señora presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciada Gabriela Michetti.

Tenemos el agrado de dirigirnos a la señora presidenta de la Honorable Cámara, a fin de solicitar conforme el artículo 19 del Reglamento del Honorable Senado la convocatoria a sesión especial para el próximo 22 de mayo del corriente, a fin de dar tratamiento a los siguientes puntos:

– Cumplimentar el artículo 22 del Reglamento del Honorable Senado para dar cuenta a los mensajes enviados por el Poder Ejecutivo, solicitando pedidos de acuerdos y retiro de mensajes.

– Órdenes del día prestando Acuerdo (año 2019): 44, 48, 59, 60, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 y 206.

– Dictamen en el proyecto de ley de varios señores/as senadores/as, sobre el Régimen de Transición del Gobierno y Traspaso de Atributos Presidenciales. (S.-49/18, S.-1.581/18, S.-2.209/18, S.-86/19, S.-303/19, S.-972 S.-984/19.) (O.D. N° 172/19.)

– Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión, por el que se crea el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. (C.D.-16/19.) (O.D. N° 169/19.)

– Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión, por el que se declara la emergencia económica, productiva, financiera y social por el término de 365 días a la cadena de producción de cítricos de las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta. (C.D.-22/19.) (O.D. N° 170/19.)

– Dictamen en el proyecto de ley del senador Cobos, sobre seguridad de presas y embalses. (S.-4.242/18.) (O.D. N° 171/19.)

– Dictamen en el proyecto del senador Schiavoni, por el que se crea el Programa Nacional de Financiamiento para Agricultura Familiar y Economías Regionales. (S.-3.078/18.) (O.D. N° 173/19.)

– Dictamen en el proyecto de ley de la senadora Fiore Viñuales, sobre reconversión productiva agropecuaria. (S.-233/19.) (O.D. N° 174/19.)

– Dictamen en el proyecto de ley en revisión, por el que se deroga su similar 1.247 sobre derechos de faros y balizas. (C.D.-45/18.) (O.D. N° 175/19.)

– Dictamen en el proyecto de ley en revisión, por el que se modifica la ley 24.449, de tránsito, sobre comprobante de seguros para circular. (C.D.-25/18.) (O.D. N° 178/19.)

– Dictamen en el proyecto de ley de los senadores Solanas y Crexell, sobre presupuestos mínimos ambientales para la adaptación y mitigación al cambio climático global. (S.-1.719 y S.-1.839/18.) (O.D. N° 176/19.)

– Dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el cual se crea el fondo fiduciario público Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata. (P.E.-315/18) (O.D. N° 135/19.)

– Dictamen en el proyecto de ley de las señoras senadoras Kunath y Durango, por el que se modifican el Código Penal y la Ley de Protección Integral a las Mujeres. (S.-4/18) (O.D. N° 136/19.)

– Dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se aprueba el Procedimiento de Restitución Internacional de Menores y de Visitas Internacionales. (P.E.-366/18.) (O.D. N° 177/19.)

– Dictamen en el proyecto de ley del señor senador Pinedo y otros, por el que se crea la Comisión Bicameral Permanente de Integración Bilateral y Cooperación entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil. (S.-619/19.) (O.D. N° 179/19.)

– Dictamen en el proyecto de ley de la señora senadora Varela, por el que se modifica la Ley de Propiedad Intelectual. (S.-1.762/18.) (O.D. N° 3/19.)

– Proyecto de ley en revisión por el que se declara monumento histórico nacional al inmueble sede de la ex bodega Faraón, ubicado en la localidad de Los Compartos, departamento de General Alvear, provincia de Mendoza. (C.D.-24/19.)

– Proyecto de ley en revisión, instituyendo la ceremonia escolar de promesa de lealtad a la Constitución Nacional, el primer día hábil siguiente al 1° de mayo de cada año. (C.D.-31/19.)

– Dictamen en el proyecto de ley de la senadora Mirkin, por el que se modifica la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. (S.-1.306/18.) (O.D. N° 137/19.)

– Proyecto de ley de la senadora Giacoppo, declarando monumento histórico nacional al edificio de la Escuela Normal “República de Bolivia” ubicado en la ciudad de Humahuaca, provincia de Jujuy. (S.-2.019/18.)

– Proyecto de ley de la senadora Giacoppo, declarando monumento histórico nacional al edificio de la Escuela Normal Superior “Juan Ignacio Gorriti”, de la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia homónima. (S.-1.392/18.)

– Órdenes del Día con proyectos de comunicación, declaración y resolución sin observaciones (año 2019): 5 y 7, 9 a 40, 73 a 133.

Saludamos a usted muy atentamente.

*Pamela F. Verasay. – Oscar A. Castillo.
– Humberto L. A. Schiavoni. – Julio C.
Martínez. – Julio C. Cobos.*

Buenos Aires, 17 de mayo de 2019.

VISTO:

La solicitud formulada por varios señores senadores para que se convoque a sesión pública especial, y

CONSIDERANDO:

Que dicho pedido se encuadra en las disposiciones reglamentarias en vigencia,

Por ello,

La presidente del Honorable Senado de la Nación

DECRETA:

Artículo 1° – Por Secretaría cítese a las/los señoras/es senadoras/es para celebrar sesión pública especial para el día miércoles 22 de mayo del corriente, a las 14.00 horas, a efectos de considerar los siguientes temas:

– Cumplimentar el artículo 22 del Reglamento del Honorable Senado para dar cuenta a los mensajes enviados por el Poder Ejecutivo, solicitando pedidos de acuerdos y retiro de mensajes.

Y asimismo, considerar los siguientes temas:

– Órdenes del Día prestando Acuerdo (año 2019): 44, 48, 59, 60, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 y 206.

– Dictamen en el proyecto de ley de varios señores/as senadores/as, sobre el Régimen de Transición del Gobierno y Traspaso de Atributos Presidenciales. (S.-549/18, S.-1.581/18, S.-2.209/18, S.-86/19, S.-303/19, S.-972, S.-984/19.) (O.D. N° 172/19.)

– Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión por el que se crea el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. (C.D.-16/19.) (O.D. N°169/19.)

– Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión, por el que se declara la emergencia económica, productiva, financiera y social por el término de 365 días a la cadena de producción de de cítricos de las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta. (C.D.-22/19.) (O.D. N° 170/19.)

– Dictamen en el proyecto de ley del senador Cobos, sobre seguridad de presas y embalses. (S.-4.242/18.) (O.D. N° 171/19.)

– Dictamen en el proyecto del senador Schiavoni, por el que se crea el Programa Nacional de Financiamiento para Agricultura Familiar y Economías Regionales. (S.-3.078/18.) (O.D. N° 173/19.)

– Dictamen en el proyecto de ley de la senadora Fiore Viñuales, sobre reconversión productiva agropecuaria. (S.-233/19.) (O.D. N° 174/19.)

– Dictamen en el proyecto de ley en revisión, por el que se deroga su similar 1.247 sobre derechos de faros y balizas. (C.D.-45/18.) (O.D. N° 175/19.)

– Dictamen en el proyecto de ley en revisión, por el que se modifica la ley 24.449, de tránsito, sobre comprobante de seguros para circular. (C.D.-25/18.) (O.D. N° 178/19.)

– Dictamen en el proyecto de ley de los senadores Solanas y Crexell, sobre presupuestos mínimos ambientales para la adaptación y mitigación al cambio climático global. (S.-1.719 y S.-1.839/18.) (O.D. N° 176/19.)

– Dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el cual se crea el fondo fiduciario público Fondo de

Asistencia Directa a Víctimas de Trata. (P.E.-315/18) (OD. N° 135/19.)

– Dictamen en el proyecto de ley de las señoras senadoras Kunath y Durango, por el que se modifican el Código Penal y la Ley de Protección Integral a las Mujeres. (S.-4/18.) (O.D. N° 136/19.)

– Dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se aprueba el Procedimiento de Restitución Internacional de Menores y de Visitas Internacionales. (P.E.-366/18.) (O.D. N° 177/19.)

– Dictamen en el proyecto de ley del señor senador Pinedo y otros, por el que se crea la Comisión Bicameral Permanente de Integración Bilateral y Cooperación entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil. (S.-619/19.) (O.D. N° 179/19.)

– Dictamen en el proyecto de ley de la señora senadora Varela, por el que se modifica la Ley de Propiedad Intelectual. (S.-1.762/18.) (O.D. N° 3/19.)

– Proyecto de ley en revisión por el que se declara monumento histórico nacional al inmueble sede de la ex bodega Faraón, ubicado en la localidad de Los Compartos, departamento de General Alvear, provincia de Mendoza. (C.D.-24/19.)

– Proyecto de ley en revisión, instituyendo la ceremonia escolar de promesa de lealtad a la Constitución

Nacional, el primer día hábil siguiente al 1° de mayo de cada año. (C.D.-31/19.)

– Dictamen en el proyecto de ley de la senadora Mirkin, por el que se modifica la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. (S.-1.306/18.) (O.D. N° 137/19.)

– Proyecto de ley de la senadora Giacoppo, monumento histórico nacional al edificio de la Escuela Normal “República de Bolivia” ubicado en la ciudad de Humahuaca, provincia de Jujuy. (S.-2.019/18.)

– Proyecto de ley de la senadora Giacoppo, declarando monumento histórico nacional al edificio de la Escuela Normal Superior “Juan Ignacio Gorriti”, de la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia homónima. (S.-1.392/18.)

– Órdenes del Día con proyectos de comunicación, declaración y resolución sin observaciones (año 2019): 5 y 7, 9 a 40, 73 a 133.

Art. 2° – Dese cuenta oportunamente al Honorable Senado.

Art. 3° – Comuníquese.

GABRIELA MICHETTI.

Juan P. Tunessi.

Proyecto: OD 135/19

Descripción: SE VOTA EN GENERAL

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Fecha: 22/05/2019 16:37:04

Acta : 4

Mayoría: MAS 1/2

LEGISLADORES PRESENTES

Miembros del cuerpo: 72

Votación: NOMINAL

Presidente: MICHETTI, Gabriela

Presentes: 47 Ausentes: 25 AMN: 24

Afirmativos: 47
Negativos: 0
Abstenciones: 0
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Aguilar, Eduardo Alberto	SI	52	37. Lovera, Daniel Aníbal	SI	5
2. Almirón, Ana Claudia	SI	57	38. Luenzo, Alfredo Héctor	SI	29
3. Alperovich, José Jorge	AUSENTE		39. Marino, Juan Carlos	AUSENTE	
4. Basualdo, Roberto Gustavo	AUSENTE		40. Martínez, Ernesto Félix	AUSENTE	
5. Blas, Ines I.	SI	11	41. Martínez, Julio	SI	44
6. Boyadjian, Miriam Ruth	SI	70	42. Mayans, José Miguel Ángel	AUSENTE	
7. Brailard Poccard, Pedro	SI	65	43. Menem, Carlos Saúl	SI	1
8. Brizuela y Doria, Ines	SI	43	44. Mera, Dalmacio	SI	17
9. Bullrich, Esteban	SI	6	45. Mirkin, Beatriz Graciela	AUSENTE	
10. Caserio, Carlos Alberto	AUSENTE		46. Montenegro, Gerardo Antenor	AUSENTE	
11. Castillo, Oscar Aníbal	AUSENTE		47. Odarda, María Magdalena	SI	71
12. Catalán Magni, Julio César	AUSENTE		48. Ojeda, José Anatolio	SI	34
13. Catalfamo, Eugenia	SI	39	49. Pais, Juan Mario	SI	33
14. Closs, Maurice	AUSENTE		50. Pereyra, Guillermo Juan	AUSENTE	
15. Cobos, Julio	SI	23	51. Perotti, Omar Angel	AUSENTE	
16. Costa, Eduardo	AUSENTE		52. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos	SI	21
17. Crexell, Carmen Lucila	AUSENTE		53. Pichetto, Miguel Ángel	SI	14
18. De Angeli, Alfredo Luis	SI	69	54. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	SI	58
19. Durango, Norma Haydee	SI	4	55. Pinedo, Federico	SI	7
20. Elías de Perez, Silvia Beatriz	AUSENTE		56. Poggi, Claudio	AUSENTE	
21. Espínola, Carlos Mauricio	AUSENTE		57. Porcel de Riccobelli, Blanca	AUSENTE	
22. Fernández de Kirchner, Cristina	SI	37	58. Reutemann, Carlos Alberto	AUSENTE	
23. Fernández Sagasti, Anabel	SI	35	59. Rodríguez Machado, Laura Elena	SI	26
24. Fiad, Mario R.	SI	24	60. Rodríguez Saá, Adolfo	AUSENTE	
25. Fiore Viñuales, María C. del Valle	SI	40	61. Romero, Juan Carlos	SI	19
26. Fuentes, Marcelo Jorge	SI	36	62. Rozas, Ángel	SI	22
27. García Larraburu, Silvina Marcela	SI	55	63. Sacnun, María de los Angeles	SI	59
28. Giacoppo, Silvia del Rosario	SI	41	64. Schiavoni, Humberto	SI	48
29. González, Gladys	SI	47	65. Snopek, Guillermo	AUSENTE	
30. González, María Teresa Margarita	AUSENTE		66. Solanas, Fernando Ezequiel	AUSENTE	
31. González, Nancy Susana	SI	60	67. Solari Quintana, Magdalena	SI	10
32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel	SI	13	68. Tapia, María Bélen	SI	66
33. Ianni, Ana María	SI	56	69. Uñac, José Rubén.	SI	28
34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa	AUSENTE		70. Urtubey, Rodolfo Julio	SI	15
35. Kunath, Sigrid Elisabeth	SI	12	71. Varela, Marta	SI	67
36. López Valverde, Cristina	SI	53	72. Verasay, Pamela	SI	45



Proyecto: OD 135/19

Descripción: SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Fecha: 22/05/2019 16:44:14

Acta : 5

Mayoría: MAS 1/2

LEGISLADORES PRESENTES

Miembros del cuerpo: 72

Votación: NOMINAL

Presidente: MICHETTI, Gabriela

Presentes: 49 Ausentes: 23 AMN: 25

Afirmativos: 49
Negativos: 0
Abstenciones: 0
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Aguilar, Eduardo Alberto	SI	52	37. Lovera, Daniel Aníbal	SI	5
2. Almirón, Ana Claudia	SI	57	38. Luenzo, Alfredo Héctor	SI	29
3. Alperovich, José Jorge	AUSENTE		39. Marino, Juan Carlos	AUSENTE	
4. Basualdo, Roberto Gustavo	SI	64	40. Martínez, Ernesto Félix	AUSENTE	
5. Blas, Ines I.	SI	11	41. Martínez, Julio	SI	44
6. Boyadjian, Miriam Ruth	SI	70	42. Mayans, José Miguel Ángel	AUSENTE	
7. Brailard Poccard, Pedro	SI	65	43. Menem, Carlos Saúl	SI	1
8. Brizuela y Doria, Ines	SI	43	44. Mera, Dalmacio	SI	17
9. Bullrich, Esteban	SI	6	45. Mirkin, Beatriz Graciela	AUSENTE	
10. Caserio, Carlos Alberto	AUSENTE		46. Montenegro, Gerardo Antenor	AUSENTE	
11. Castillo, Oscar Aníbal	AUSENTE		47. Odarda, María Magdalena	SI	71
12. Catalán Magni, Julio César	AUSENTE		48. Ojeda, José Anatolio	SI	34
13. Catalfamo, Eugenia	SI	39	49. Pais, Juan Mario	SI	33
14. Closs, Maurice	AUSENTE		50. Pereyra, Guillermo Juan	AUSENTE	
15. Cobos, Julio	SI	23	51. Perotti, Omar Angel	AUSENTE	
16. Costa, Eduardo	AUSENTE		52. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos	SI	21
17. Crexell, Carmen Lucila	AUSENTE		53. Pichetto, Miguel Ángel	SI	14
18. De Angeli, Alfredo Luis	SI	69	54. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	SI	58
19. Durango, Norma Haydee	SI	4	55. Pinedo, Federico	SI	7
20. Elías de Perez, Silvia Beatriz	AUSENTE		56. Poggi, Claudio	AUSENTE	
21. Espínola, Carlos Mauricio	AUSENTE		57. Porcel de Riccobelli, Blanca	AUSENTE	
22. Fernández de Kirchner, Cristina	SI	37	58. Reutemann, Carlos Alberto	AUSENTE	
23. Fernández Sagasti, Anabel	SI	35	59. Rodríguez Machado, Laura Elena	SI	26
24. Fiad, Mario R.	SI	24	60. Rodríguez Saá, Adolfo	AUSENTE	
25. Fiore Viñuales, María C. del Valle	SI	40	61. Romero, Juan Carlos	SI	19
26. Fuentes, Marcelo Jorge	SI	36	62. Rozas, Ángel	SI	22
27. García Larraburu, Silvina Marcela	SI	55	63. Sacnun, María de los Angeles	SI	59
28. Giacoppo, Silvia del Rosario	SI	41	64. Schiavoni, Humberto	SI	48
29. González, Gladys	SI	47	65. Snopek, Guillermo	SI	51
30. González, María Teresa Margarita	AUSENTE		66. Solanas, Fernando Ezequiel	AUSENTE	
31. González, Nancy Susana	SI	60	67. Solari Quintana, Magdalena	SI	10
32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel	SI	13	68. Tapia, María Bélen	SI	66
33. Ianni, Ana María	SI	56	69. Uñac, José Rubén.	SI	28
34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa	AUSENTE		70. Urtubey, Rodolfo Julio	SI	15
35. Kunath, Sigrid Elisabeth	SI	12	71. Varela, Marta	SI	67
36. López Valverde, Cristina	SI	53	72. Verasay, Pamela	SI	45

Observaciones: Se vota con modificaciones al Art. 3º.



3

(S.-1.522/19)

Buenos Aires, 17 de mayo de 2019.

A la señora presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciada Gabriela Michetti.

S/D.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi carácter de senadora nacional por la provincia de Tucumán, a fin de solicitar licencia sin goce de haberes, desde el 20 de mayo al 10 de junio inclusive, con motivo del inicio de la campaña electoral en mi provincia, ello conforme lo establecido por los artículos 25 y 26 del Reglamento del Honorable Senado de la Nación.

Sin más, saludo a la señora presidente con mi consideración y estima.

Silvia Elías de Perez.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación

RESUELVE:

Artículo 1° – Conceder a la señora senadora nacional doña Silvia B. Elías de Perez, licencia sin goce de dieta desde el día 20 de mayo hasta el 10 de junio de 2019, inclusive.

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo del año dos mil diecinueve.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

4

(D.P.P.-35/19)

Buenos Aires, 26 de abril de 2019.

VISTO:

La solicitud formulada por la señora senadora doña Anabel Fernandez Sagasti, y los señores senadores don Alfredo Luenzo y don José A. Ojeda de declarar de interés del Honorable Senado, el Informe realizado por la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA “San Juan” (ley 27.433), y

CONSIDERANDO:

Que en virtud de la importancia y la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido por la ley 27.433, que determina la elaboración de un informe final de carácter público, y de las facultades oportunamente otorgadas a esta presidencia.

Por ello:

El presidente provisional del Honorable Senado

DECRETA:

Artículo 1° – Autorízase la impresión de quinientos (500) ejemplares del Informe realizado por la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA “San Juan” (Ley 27.433), para su distribución gratuita.

Art. 2° – La publicación de dicho Informe estará a cargo de la Dirección General de Publicaciones, debiéndose imprimir en la Imprenta del Congreso de la Nación para su divulgación.

Art. 3° – Los gastos de publicación serán imputados al presupuesto del Honorable Senado de la Nación en sus partidas correspondientes

Art. 4° – El presente se dicta ad referendum de la oportuna ratificación del Cuerpo previo a la impresión de la obra ut supra mencionada.

Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

GABRIELA MICHETTI.

Juan P. Tunessi.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación

RESUELVE:

Artículo 1° – Refrendar el decreto D.P.P.-35/19, de fecha 26 de abril de 2019, por el cual se autoriza la impresión del Informe realizado por la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA “San Juan” –Ley 27.433–.

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo del año dos mil diecinueve.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

5

(Orden del Día N° 135)

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional, registrado bajo expediente P.E.-315/18 (mensaje 176/18), creando el fondo fiduciario público Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata –Ley 26.364–; y, por las razones que dará el miembro informante, aconsejan su aprobación.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 16 de abril de 2019.

Pedro G. Á. Guastavino. – Esteban J. Bullrich. – Ernesto Félix Martínez. – Beatriz G. Mirkin. – Cristina Fiore Viñuales. – Ángel Rozas. – Pamela F. Verasay. – Claudio J. Poggi. – Olga I. Brizuela y Doria. – Julio C. Martínez. – Rodolfo J. Urtubey. – Gladys E. González. – Sigrid E. Kunath. – Laura E. Rodríguez Machado. – José M. Á. Mayans. – Juan C. Romero. – Juan M. Pais. – Néstor P. Braillard Pocard.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – Créase el fondo fiduciario público denominado Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - Ley 26.364, el que se conformará como un fideicomiso de administración destinado a la asistencia directa a víctimas del delito de trata y explotación de personas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 27, segundo párrafo, de la citada ley, su modificatoria y su decreto reglamentario 111 del 26 de enero de 2015.

Los bienes que integran el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - Ley 26.364 no se computarán para el cálculo de los recursos del presupuesto nacional y tienen carácter extrapresupuestario de acuerdo al destino específico establecido en el artículo 27, segundo párrafo, de la ley 26.364 y su modificatoria.

Art. 2º – A los efectos de la presente ley, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se indica:

- a) **Fiduciante:** Es el Estado nacional, en cuanto transfiere la propiedad fiduciaria de los bienes fideicomitidos al fiduciario con destino exclusivo e irrevocable al cumplimiento de la presente ley y del contrato de fideicomiso respectivo;
- b) **Fiduciario:** Es Nación Fideicomisos S.A., como administrador de los bienes que se transfieren en fideicomiso con el destino exclusivo e irrevocable que se establece en la presente ley, de conformidad con las pautas establecidas en el contrato de fideicomiso y las instrucciones dispuestas por la unidad ejecutiva;
- c) **Beneficiarios:** Son las víctimas del delito de trata y explotación de personas;
- d) **Fideicomisario:** El Estado nacional será el destinatario final de los fondos integrantes del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de

Trata - Ley 26.364, en caso de su extinción o liquidación, los cuales deberán destinarse a la asistencia directa a víctimas del delito de trata y explotación de personas;

- e) **Unidad ejecutiva:** La unidad ejecutiva es la encargada de impartir instrucciones y/o autorizar en forma previa las actividades a cargo del fiduciario y efectuar su seguimiento. En todos los supuestos las instrucciones respetarán la decisión de destino de los bienes que indique en cada caso el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, el que funciona en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

El Poder Ejecutivo nacional instrumentará las medidas necesarias para que, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se brinde el apoyo técnico que la unidad ejecutiva requiera;

- f) **Bienes fideicomitidos:** Son los fondos líquidos decomisados y aquellos que constituyen el producido de la venta de los bienes decomisados en procesos relacionados con el delito de trata y explotación de personas y de lavado de activos provenientes de tales ilícitos cuya sentencia se encuentre firme o, no encontrándose firme, cuando el juez de la causa autorice la venta, de conformidad con la finalidad establecida en el artículo 27, segundo párrafo, de la ley 26.364, su modificatoria, su decreto reglamentario y sus normas complementarias.

Art. 3º – Los recursos del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - Ley 26.364 se destinarán, de acuerdo a la finalidad establecida en el artículo 27, segundo párrafo, de dicha ley, a la asistencia directa a víctimas del delito de trata y explotación de personas.

En aquellos casos en que las restituciones a víctimas de los delitos mencionados en el párrafo anterior no hayan podido ser satisfechas con los bienes decomisados al condenado en la causa respectiva, el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas deberá utilizar los recursos del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - Ley 26.364 para cubrir tales situaciones de forma prioritaria.

Art. 4º – Al ordenarse el decomiso de bienes sujetos a inscripción en los registros públicos correspondientes, bastará con la resolución firme de la autoridad judicial competente para que la sección respectiva de dicho registro proceda con la inscripción o traspaso del bien a favor del Estado nacional - Ley 26.364, y con destino del producido de su realización al fondo fiduciario público denominado Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - Ley 26.364, creado por el artículo 1º de la presente, o a nombre del tercero comprador del bien en caso de procederse a su venta a fin de transmitir

al fondo fiduciario mencionado el producido de esta. La inscripción o traspaso estará exenta del pago de todos los impuestos, tasas, aranceles, timbres o derechos de traspaso o inscripción dispuestos por leyes nacionales.

En el caso de los vehículos, embarcaciones, aeronaves u otros bienes que tengan alteraciones de señas y marcas que impidan o imposibiliten su debida inscripción, la autoridad correspondiente concederá una identificación especial para su individualización e inscripción o traspaso del bien a favor del Estado nacional - Ley 26.364 y con destino del producido de su realización al fondo fiduciario público denominado Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - Ley 26.364, creado por el artículo 1º de la presente, o a nombre del tercero comprador del bien en caso de procederse a su venta a fin de transmitir al fondo fiduciario mencionado el producido de la misma. Para los supuestos previstos en este párrafo, se aplicará también la exención de pago establecida en el primer párrafo, última parte, de este artículo.

Los tributos sobre los bienes que se encuentran sujetos a decomiso en virtud de la presente ley no generarán intereses moratorios durante el proceso y, en ese lapso, se suspenderá el término para iniciar o proseguir los procesos de cobro tributario. Una vez firme el decomiso y enajenados los bienes, se cancelará la deuda tributaria pendiente por pagar con cargo al producto de la venta.

Art. 5º – El Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - Ley 26.364 tendrá una duración de treinta (30) años, contados desde la suscripción del contrato de fideicomiso. No obstante ello, el fiduciario conservará los recursos suficientes para atender los compromisos pendientes, reales o contingentes, que haya asumido el fondo mencionado, hasta la fecha de extinción de esas obligaciones.

Al vencimiento del plazo establecido en el primer párrafo, con la salvedad allí efectuada, todos los bienes fideicomitidos que integren el patrimonio del citado fondo en ese momento serán transferidos al Estado nacional en su carácter de fideicomisario, los cuales deberán destinarse a programas de asistencia directa a víctimas del delito de trata y explotación de personas.

Art. 6º – Exímese al fondo fiduciario público creado por el artículo 1º de la presente ley y al fiduciario en sus operaciones relativas a aquel, de todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse en el futuro. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la eximición de todos los tributos aplicables en su jurisdicción en iguales términos a los establecidos en el presente.

Art. 7º – La autoridad de aplicación y/o quien esta designe en su reemplazo aprobará el contrato de fideicomiso dentro de los treinta (30) días de aprobada la reglamentación de la presente ley.

Art. 8º – La autoridad de aplicación y/o quien esta designe en su reemplazo suscribirá el contrato de fideicomiso con el fiduciario.

Art. 9º – Toda actuación que fuere menester formalizar a través de escritura pública será protocolizada a través de la Escribanía General de Gobierno de la Nación, sin que ello implique erogación alguna.

Art. 10. – Los bienes fideicomitidos deberán inscribirse, con indicación de su destino, en el Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados durante el proceso penal, el que funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional implementará un sitio de consulta pública y gratuita en Internet, a fin de dar publicidad a los bienes que ingresen al fondo creado por la presente y a su destino, así como también a todas las decisiones, auditorías e informes que se realicen en el marco de la presente ley.

Art. 12. – Sustitúyese el artículo 27 de la ley 26.364 y su modificatoria, por el siguiente:

Artículo 27: El presupuesto general de la Nación incluirá anualmente las partidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley. Asimismo, los organismos creados por la presente ley se podrán financiar con recursos provenientes de acuerdos de cooperación internacional, donaciones o subsidios.

Los decomisos aplicados en virtud de esta ley y aquellos originados en causas de lavado de activos provenientes de los delitos previstos en la presente norma, tendrán como destino específico un fondo de asistencia directa a las víctimas administrado por el Consejo Federal para la Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas cuyo régimen será establecido por una ley especial.

Lo dispuesto en el segundo párrafo de este artículo constituye una excepción a lo establecido en el artículo 23, sexto párrafo *in fine*, del Código Penal de la Nación.

Art. 13. – Incorpórase como artículo 28 de la ley 26.364 y su modificatoria, el siguiente:

Artículo 28: En los casos de trata y explotación de personas, la sentencia condenatoria o decisión judicial equivalente que conceda la suspensión del proceso a prueba, que admita el acuerdo de juicio abreviado o que disponga el decomiso sin condena, deberá ordenar las restituciones económicas que correspondan a la víctima, como medida destinada a reponer las cosas al estado anterior a la comisión del delito.

A tal efecto y a fin de asegurar que la sentencia que disponga las restituciones y otras reparaciones económicas a la víctima sea de cumplimiento efectivo, los magistrados o funcionarios del Poder Judicial de la Nación o del Ministerio Público Fiscal, deberán en la primera oportunidad posible, identificar los activos del imputado y solicitar o adoptar en su caso, todas las medidas cautelares que resulten necesarias y eficaces, según la na-

turalidad del bien, para asegurar la satisfacción adecuada de tales responsabilidades.

Las restituciones y otras reparaciones económicas que se ordenen en virtud del presente artículo no obstarán a que las víctimas obtengan una indemnización integral de los daños ocasionados por el delito, mediante el ejercicio de la acción civil correspondiente.

Art. 14. – Sustitúyese el artículo 27 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:

Artículo 27: El desarrollo de las actividades de la Unidad de Información Financiera (UIF) debe financiarse con los siguientes recursos:

- a) Aportes determinados en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional dentro de los asignados al Ministerio de Hacienda;
- b) Los recursos que bajo cualquier título reciba de organismos públicos, privados, nacionales e internacionales.

En todos los casos, el producido de la venta o administración de los bienes o instrumentos provenientes de los delitos previstos en esta ley y de los decomisos ordenados en su consecuencia, así como también las ganancias obtenidas ilícitamente y el producido de las multas que en su consecuencia se impongan, serán destinados –con excepción de lo establecido en el último párrafo de este artículo– a una cuenta especial del Tesoro nacional. Dichos fondos serán afectados a financiar el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), los programas previstos en el artículo 39 de la ley 23.737 y sus modificatorias, los de salud y capacitación laboral, conforme lo establezca la reglamentación pertinente.

El dinero y los otros bienes o recursos secuestrados judicialmente por la comisión de los delitos previstos en esta ley, serán entregados por el tribunal interviniente a un fondo especial que instituirá el Poder Ejecutivo nacional.

Dicho fondo podrá administrar los bienes y disponer del dinero conforme a lo establecido precedentemente, siendo responsable de su devolución a quien corresponda cuando así lo dispusiere una resolución judicial firme.

Quedan exceptuados de lo dispuesto en el presente artículo los decomisos ordenados en los casos de lavado de activos cuyo ilícito precedente esté relacionado a la trata y explotación de personas, en cuyo caso los decomisos tendrán como destino específico el Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas establecido en el artículo 27, segundo párrafo, de la ley 26.364 y su modificatoria.

Art. 15. – Los gastos que genere la implementación de la presente ley serán solventados por el fideicomiso creado mediante el artículo 1º de la presente.

Art. 16. – El veinte por ciento (20 %) de los fondos que ingresen al fideicomiso creado por la presente ley será afectado a atender reclamos que pudieren originarse con relación a los bienes decomisados.

Art. 17. – Los fondos líquidos decomisados o los obtenidos del producido de la venta de bienes decomisados en causas judiciales por infracción a la ley 26.364 y sus modificatorias que, al momento de la entrada en vigencia de la presente ley, se encuentren a disposición de magistrados del Poder Judicial de la Nación, deben transferirse al fondo creado por el artículo 1º de esta ley dentro del plazo de treinta (30) días de encontrarse operativo.

Art. 18. – La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

MAURICIO MACRI.

Marcos Peña. – Germán C. Garavano.

Mensaje del Poder Ejecutivo

Buenos Aires, 4 de octubre de 2018.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley tendiente a la adopción de diversas innovaciones legislativas encaminadas a dar respuesta a los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina, de los que se deriva la obligación de asistir a las víctimas de trata de personas.

Concretamente, los artículos 2º, 5º y 9º del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, instrumentos aprobados por la ley 25.632, imponen a los Estados parte el compromiso de prevenir y combatir tales conductas criminales y también brindar asistencia a sus víctimas.

Asimismo, el artículo 25, párrafo 2, de la referida convención prevé que cada Estado parte establecerá procedimientos adecuados que permitan a las víctimas acceder a las indemnizaciones y restituciones a las que son acreedoras.

En ese contexto, la iniciativa remitida está encaminada a cumplir los referidos compromisos, en primer lugar, a través de una política ágil de recupero de activos en sede judicial.

En ese sentido, el artículo 23 del Código Penal dispone, respecto de los decomisos, que: “En todos los casos en que recayese condena por delitos previstos en este código o en leyes penales especiales, la misma decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito, en favor del Estado nacional, de las provincias o de los municipios, salvo los derechos de restitución o indemnización del dam-

nificado y de terceros...”; especificando la norma en su sexto párrafo que: “En el caso de condena impuesta por alguno de los delitos previstos por los artículos...” 127 –explotación económica del ejercicio de la prostitución– “...queda comprendido entre los bienes a decomisar la cosa mueble o inmueble donde se mantuviera a la víctima privada de su libertad u objeto de explotación. Los bienes decomisados con motivo de tales delitos, según los términos del presente artículo y el producido de las multas que se impongan, serán afectados a programas de asistencia a la víctima”.

En consonancia con ello, la ley 26.364 y su modificatoria, relativa a la prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, establece en el artículo 27 que: “Los decomisos aplicados en virtud de esta ley tendrán como destino específico un fondo de asistencia directa a las víctimas administrado por el Consejo Federal para la lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección de Asistencia a las Víctimas”.

En virtud de ello, corresponde en esta instancia instrumentar el fondo al que refiere el artículo transcrito en el párrafo anterior, regulando su funcionamiento bajo la forma de un fideicomiso, al que se denominará Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - Ley 26.364.

En ese contexto, se dispone que los representantes del Ministerio Público Fiscal y/o del Poder Judicial de la Nación lleven a cabo con la mayor celeridad posible las investigaciones patrimoniales que sean necesarias para identificar y localizar los bienes que constituyen tanto el instrumento como la ganancia del delito, respecto de personas humanas o jurídicas, refiriéndose en este último supuesto a los casos en que tras la pantalla de una actividad aparentemente lícita, se oculta una asociación criminal.

En el marco referido en el párrafo anterior, son las propias empresas las que se benefician con la explotación económica a la que son sometidas las personas que sufren la trata, maximizando sus ganancias a costa del trabajo en condiciones análogas a la esclavitud, en forma incompatible con la dignidad del ser humano o mediante graves violaciones a los derechos humanos.

Dicha tarea deberá complementarse con la solicitud o adopción, en su caso, en la primera oportunidad posible, de todas las medidas cautelares que resulten necesarias y eficaces, según la naturaleza del bien, para asegurar los bienes identificados e impedir que durante el transcurso del proceso se realicen actos de enajenación u ocultamiento que impidan su ejecución.

En línea con ello, al momento de la sentencia, deberán ordenarse las restituciones y/o reparaciones económicas que correspondan en favor de la víctima, como primera medida de reparación del daño que resulta indispensable para hacer cesar los efectos del delito, teniendo en consideración el estado de la víctima anterior al momento del hecho, afectándose los bienes recuperados a satisfacer dicha responsabilidad en forma preferente.

De este modo, el acceso a la restitución de derechos de las víctimas de trata ya no estará subordinado a que

esta asuma un rol activo para obtener una reparación mediante el impulso de una acción civil ordinaria, sino que tendrá carácter obligatorio su previsión en la sentencia.

Por otra parte, el proyecto contempla otras medidas complementarias, que corresponderá implementar en sede administrativa, en previsión de los casos en que al momento de la sentencia no existan bienes en poder del tratante.

En ese sentido, ya sea porque el condenado resulte insolvente y/o porque durante la sustanciación del proceso no se hayan identificado, localizado y cautelado los activos vinculados al delito y estos hubiesen sido transferidos u ocultados, resulta necesario que el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas a ser administrado por el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas en los términos del citado artículo 27 de la ley 26.364 y su modificatoria, suministre los medios requeridos para que la víctima no vea frustrado su derecho a obtener la restitución.

Estas son las pautas que se han definido en el marco de las reuniones del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas y con fundamento en el trabajo realizado por la Comisión Permanente de Supervisión de la Unidad de Bienes Embargados y Sujetos a Decomiso.

En ese ámbito se acordó que los activos del fondo se destinarán en forma prioritaria a satisfacer en forma efectiva las restituciones que, luego de ser ordenadas judicialmente en favor de la víctima, no pudieran ser satisfechas con los bienes decomisados al condenado.

Finalmente, se ha podido advertir que, muchas veces, los activos ilícitos producto de la trata de personas son introducidos en la economía formal mediante sofisticadas maniobras de lavado de activos, ordenándose su decomiso en función de la ley 25.246 y sus modificatorias, la cual contempla un destino diverso para los bienes.

En virtud de ello, resulta necesario compatibilizar dicha ley y su similar 26.364 de modo de procurar los fines reparatorios aquí mencionados.

Por los fundamentos que anteceden, solicito a vuestra honorabilidad el tratamiento de este proyecto y su aprobación como ley de la Nación.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

MAURICIO MACRI.

Marcos Peña. – Germán C. Garavano.

Sanción del Honorable Senado

Buenos Aires, 22 de mayo de 2019.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,

ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en revisión a esa Honorable Cámara:

El Senado y Cámara de Diputados,...

**LEY DE CREACIÓN DEL FONDO
FIDUCIARIO PÚBLICO.
FONDO DE ASISTENCIA DIRECTA
A VÍCTIMAS DE TRATA - LEY 26.364**

Artículo 1º – Créase el Fondo Fiduciario Público denominado Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - Ley 26.364, el que se conformará como un Fideicomiso de Administración destinado a la asistencia directa a víctimas del delito de trata y explotación de personas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 27, segundo párrafo, de la citada ley, su modificatoria y su decreto reglamentario 111 del 26 de enero de 2015.

Los bienes que integran el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - Ley 26.364 no se computarán para el cálculo de los recursos del presupuesto nacional y tienen carácter extrapresupuestario de acuerdo al destino específico establecido en el artículo 27, segundo párrafo, de la ley 26.364 y su modificatoria.

Art. 2º – A los efectos de la presente ley, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se indica:

- a) *Fiduciante*. Es el Estado nacional, en cuanto transfiere la propiedad fiduciaria de los bienes fideicomitidos al fiduciario con destino exclusivo e irrevocable al cumplimiento de la presente ley y del Contrato de Fideicomiso respectivo;
- b) *Fiduciario*. Es Nación Fideicomisos S.A., como administrador de los bienes que se transfieren en fideicomiso con el destino exclusivo e irrevocable que se establece en la presente ley, de conformidad con las pautas establecidas en el Contrato de Fideicomiso y las instrucciones dispuestas por la unidad ejecutiva;
- c) *Beneficiarios*. Son las víctimas del delito de trata y explotación de personas;
- d) *Fideicomisario*. El Estado nacional será el destinatario final de los fondos integrantes del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - Ley 26.364, en caso de su extinción o liquidación, los cuales deberán destinarse a la asistencia directa a víctimas del delito de trata y explotación de personas;
- e) *Unidad Ejecutiva*. La Unidad Ejecutiva es la encargada de impartir instrucciones y/o autorizar en forma previa las actividades a cargo del fiduciario y efectuar su seguimiento. En todos los supuestos, las instrucciones respetarán la decisión de destino de los bienes que indique en cada caso el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y

para la Protección y Asistencia a las Víctimas, el que funciona en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

El Poder Ejecutivo nacional instrumentará las medidas necesarias para que, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se brinde el apoyo técnico que la unidad ejecutiva requiera;

- f) *Bienes fideicomitidos*. Son los fondos líquidos decomisados y aquellos que constituyen el producido de la venta de los bienes decomisados en procesos relacionados con el delito de trata y explotación de personas y de lavado de activos provenientes de tales ilícitos cuya sentencia se encuentre firme o, no encontrándose firme, cuando el juez de la causa autorice la venta, de conformidad con la finalidad establecida en el artículo 27, segundo párrafo, de la ley 26.364, su modificatoria, su decreto reglamentario y sus normas complementarias.

Art. 3º – Los recursos del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - Ley 26.364 se destinarán, de acuerdo a la finalidad establecida en el artículo 27, segundo párrafo, de dicha ley, a la asistencia directa a víctimas del delito de trata y explotación de personas.

En aquellos casos que la asistencia directa a las víctimas y las reparaciones previstas en el artículo 6º de la ley 26.364 no hayan podido ser satisfechas con los bienes decomisados al condenado en la causa respectiva, el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas deberá utilizar los recursos del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - Ley 26.364 para cubrir tales situaciones de forma prioritaria.

Art. 4º – Al ordenarse el decomiso de bienes sujetos a inscripción en los registros públicos correspondientes, bastará con la resolución firme de la autoridad judicial competente para que la sección respectiva de dicho registro proceda con la inscripción o traspaso del bien a favor del Estado nacional - ley 26.364, y con destino del producido de su realización al fondo fiduciario público denominado Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - Ley 26.364, creado por el artículo 1º de la presente, o a nombre del tercero comprador del bien en caso de procederse a su venta a fin de transmitir al fondo fiduciario mencionado el producido de esta. La inscripción o traspaso estará exenta del pago de todos los impuestos, tasas, aranceles, timbres o derechos de traspaso o inscripción dispuestos por leyes nacionales.

En el caso de los vehículos, embarcaciones, aeronaves u otros bienes que tengan alteraciones de señas y marcas que impidan o imposibiliten su debida inscripción, la autoridad correspondiente concederá una identificación especial para su individualización e inscripción o traspaso del bien a favor del Estado nacional - ley 26.364 y con destino del producido de

su realización al fondo fiduciario público denominado Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - Ley 26.364, creado por el artículo 1º de la presente, o a nombre del tercero comprador del bien en caso de procederse a su venta a fin de transmitir al fondo fiduciario mencionado el producido de la misma. Para los supuestos previstos en este párrafo, se aplicará también la exención de pago establecida en el primer párrafo, última parte, de este artículo.

Los tributos sobre los bienes que se encuentran sujetos a decomiso en virtud de la presente ley no generarán intereses moratorios durante el proceso y, en ese lapso, se suspenderá el término para iniciar o proseguir los procesos de cobro tributario. Una vez firme el decomiso y enajenados los bienes, se cancelará la deuda tributaria pendiente por pagar con cargo al producto de la venta.

Art. 5º – El Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - Ley 26.364 tendrá una duración de treinta (30) años, contados desde la suscripción del Contrato de Fideicomiso. No obstante ello, el fiduciario conservará los recursos suficientes para atender los compromisos pendientes, reales o contingentes, que haya asumido el fondo mencionado, hasta la fecha de extinción de esas obligaciones.

Al vencimiento del plazo establecido en el primer párrafo, con la salvedad allí efectuada, todos los bienes fideicomitados que integren el patrimonio del citado fondo en ese momento serán transferidos al Estado nacional en su carácter de fideicomisario, los cuales deberán destinarse a programas de asistencia directa a víctimas del delito de trata y explotación de personas.

Art. 6º – Exímese al Fondo Fiduciario Público creado por el artículo 1º de la presente ley y al fiduciario en sus operaciones relativas a aquel, de todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse en el futuro. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la eximición de todos los tributos aplicables en su jurisdicción en iguales términos a los establecidos en el presente.

Art. 7º – La autoridad de aplicación y/o quien esta designe en su reemplazo aprobará el Contrato de Fideicomiso dentro de los treinta (30) días de aprobada la reglamentación de la presente ley.

Art. 8º – La autoridad de aplicación y/o quien esta designe en su reemplazo suscribirá el Contrato de Fideicomiso con el fiduciario.

Art. 9º – Toda actuación que fuere menester formalizar a través de escritura pública será protocolizada a través de la Escribanía General del Gobierno de la Nación, sin que ello implique erogación alguna.

Art. 10. – Los bienes fideicomitados deberán inscribirse, con indicación de su destino, en el Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados durante el Proceso Penal, el que funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional implementará un sitio de consulta pública y gratuita en Internet, a fin de dar publicidad a los bienes que ingresen al fondo creado por la presente y a su destino, así como también a todas las decisiones, auditorías e informes que se realicen en el marco de la presente ley.

Art. 12. – Sustitúyese el artículo 27 de la ley 26.364 y su modificatoria por el siguiente:

Artículo 27: El presupuesto general de la Nación incluirá anualmente las partidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley. Asimismo, los organismos creados por la presente ley se podrán financiar con recursos provenientes de acuerdos de cooperación internacional, donaciones o subsidios.

Los decomisos aplicados en virtud de esta ley y aquellos originados en causas de lavado de activos provenientes de los delitos previstos en la presente norma tendrán como destino específico un Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas administrado por el Consejo Federal para la Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas cuyo régimen será establecido por una ley especial.

Lo dispuesto en el segundo párrafo de este artículo constituye una excepción a lo establecido en el artículo 23, sexto párrafo *in fine*, del Código Penal de la Nación.

Art. 13. – Incorpórase como artículo 28 de la ley 26.364 y su modificatoria el siguiente:

Artículo 28: En los casos de trata y explotación de personas, la sentencia condenatoria o decisión judicial equivalente que conceda la suspensión del proceso a prueba, que admita el acuerdo de juicio abreviado o que disponga el decomiso sin condena, deberá ordenar las restituciones económicas que correspondan a la víctima, como medida destinada a reponer las cosas al estado anterior a la comisión del delito.

A tal efecto y a fin de asegurar que la sentencia que disponga las restituciones y otras reparaciones económicas a la víctima sea de cumplimiento efectivo, los magistrados o funcionarios del Poder Judicial de la Nación o del Ministerio Público Fiscal deberán, en la primera oportunidad posible, identificar los activos del imputado y solicitar o adoptar en su caso, todas las medidas cautelares que resulten necesarias y eficaces, según la naturaleza del bien, para asegurar la satisfacción adecuada de tales responsabilidades.

Las restituciones y otras reparaciones económicas que se ordenen en virtud del presente artículo no obstarán a que las víctimas obtengan una indemnización integral de los daños ocasionados por el delito, mediante el ejercicio de la acción civil correspondiente.

Art. 14. – Sustitúyese el artículo 27 de la ley 25.246 y sus modificatorias por el siguiente:

Artículo 27: El desarrollo de las actividades de la Unidad de Información Financiera (UIF) debe financiarse con los siguientes recursos:

- a) Aportes determinados en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional dentro de los asignados al Ministerio de Hacienda;
- b) Los recursos que bajo cualquier título reciba de organismos públicos, privados, nacionales e internacionales.

En todos los casos, el producido de la venta o administración de los bienes o instrumentos provenientes de los delitos previstos en esta ley y de los decomisos ordenados en su consecuencia, así como también las ganancias obtenidas ilícitamente y el producido de las multas que en su consecuencia se impongan, serán destinados –con excepción de lo establecido en el último párrafo de este artículo– a una cuenta especial del Tesoro nacional. Dichos fondos serán afectados a financiar el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), los programas previstos en el artículo 39 de la ley 23.737 y sus modificatorias, los de salud y capacitación laboral, conforme lo establezca la reglamentación pertinente.

El dinero y los otros bienes o recursos secuestrados judicialmente por la comisión de los delitos previstos en esta ley serán entregados por el tribunal interviniente a un fondo especial que instituirá el Poder Ejecutivo nacional.

Dicho fondo podrá administrar los bienes y disponer del dinero conforme a lo establecido precedentemente, siendo responsable de su devolución a quien corresponda cuando así lo dispusiere una resolución judicial firme.

Quedan exceptuados de lo dispuesto en el presente artículo los decomisos ordenados en los casos de lavado de activos cuyo ilícito precedente esté relacionado a la trata y explotación de personas, en cuyo caso los decomisos tendrán como destino específico el Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas establecido en el artículo 27, segundo párrafo, de la ley 26.364 y su modificatoria.

Art. 15. – Los gastos que genere la implementación de la presente ley serán solventados por el fideicomiso creado mediante el artículo 1º de la presente.

Art. 16. – El veinte por ciento (20 %) de los fondos que ingresen al fideicomiso creado por la presente ley será afectado a atender reclamos que pudieren originarse con relación a los bienes decomisados.

Art. 17. – Los fondos líquidos decomisados o los obtenidos del producido de la venta de bienes decomisados en causas judiciales por infracción a la ley 26.364 y sus modificatorias que, al momento de la entrada en

vigencia de la presente ley, se encuentren a disposición de magistrados del Poder Judicial de la Nación, deben transferirse al fondo creado por el artículo 1º de esta ley dentro del plazo de treinta (30) días de encontrarse operativo.

Art. 18. – La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Saludo a usted muy atentamente.

GABRIELA MICHETTI.

Juan P. Tunessi.

6

(Orden del Día N° 136)

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestras Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Banca de la Mujer han considerado el proyecto de ley de las señoras senadoras Sigrid Kunath y Norma Durango registrado bajo expediente S.-4/18, mediante el cual se modifican el Código Penal y la ley 26.485, respecto al incumplimiento de resoluciones judiciales en protección de las víctimas de violencia de género y teniendo a la vista el expediente S.-986/19, del señor senador José A. Ojeda que reproduce el proyecto de ley que modifica su similar 26.485 –protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres–, respecto al incumplimiento de medidas cautelares o de las órdenes de protección dictadas por autoridades judiciales (ref. S.-1.749/17); y, por las razones que dará el miembro informante, aconsejan la aprobación del expediente S.-4/18.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 16 de abril de 2019.

Pedro G. Á. Guastavino. – Norma H. Durango. – Ernesto Félix Martínez. – Gladys E. González. – Cristina Fiore Viñuales. – Olga I. Brizuela y Doria. – Pamela F. Veraray. – María E. Catalfamo. – Sigrid E. Kunath. – María T. M. González. – José M. Á. Mayans. – Cristina López Valverde. – Juan M. Pais. – Beatriz G. Mirkin. – Néstor P. Braillard Pocard. – Magdalena Solari Quintana.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – Incorpórese como último párrafo del artículo 239 de la ley 11.179, Código Penal, el siguiente:

Si la orden desobedecida fuera una resolución judicial que tuviera por objeto salvaguardar la in-

una cita del economista alemán Klaus Schwab, que en el Foro Económico Mundial de Davos dijo: “Hay tres razones por las que las transformaciones actuales no representan una prolongación de la tercera revolución industrial, sino la llegada de una distinta: la velocidad, el alcance y el impacto en los sistemas. La velocidad de los avances actuales no tiene precedentes en la historia y está interfiriendo en casi todas las industrias de todos los países”.

Nos encontraremos con un mundo, y por tanto con un país, modificado sustancialmente por nuevas formas productivas; esto requerirá de la intervención de este Congreso para garantizar un complejo científico-tecnológico adecuado con un sistema educativo de punta que promocióne emprendedores que estén a la altura de desafíos y promueva una prosperidad inclusiva que nos depare un futuro mejor.

2

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
VERASAY

**Emergencia Económica, Productiva, Financiera
y Social de la Cadena de Producción de Cárnicos
de las provincias de Entre Ríos, Corrientes,
Misiones, Jujuy, Salta, Buenos Aires y Catamarca
(O.D. N° 170/19 y S.-1.424/19)**

Señora presidente:

El mismo día que impulsamos el proyecto sobre Régimen de Promoción de la Economía del conocimiento, nos disponemos a tratar este instrumento que facilita el acceso al financiamiento para la agricultura familiar y las economías regionales. Esto es así porque los avances tecnológicos y el mundo globalizado nos impulsan a subimos a las olas del cambio, pero siempre en estos procesos de aceleración y de forma mucho más profunda aún en países periféricos aparecen estas asimetrías que tienen que ver con el desarrollo incompleto e imperfecto del país, que tiene sectores sociales que necesitan respaldo para desarrollar su trabajo y fortalecer su economía, situación que contemporiza con los nuevos desafíos de la revolución 4.0 que exigen estar en la vanguardia tecnológica.

Esta complejidad de la situación que atraviesa la sociedad argentina, hoy se ve reflejada en el tratamiento de los temas que aborda el Senado, por un lado, estimulando la competitividad de punta en tecnologías del crecimiento y, por el otro, permitiendo que las personas que desarrollan la economía agrícola familiar se puedan convertir en sujetos de crédito para mejorar sus posibilidades de producción y también tengan mejores accesos a los canales de comercialización de sus productos.

Para este fin se crea el Fondagro, impulsando la incorporación de maquinaria y equipamiento, inversiones prediales, capital de trabajo, regularización dominial del acceso a la tierra o reconversión productiva.

En materia de comercialización faculta al Poder Ejecutivo para realización de ferias y en especial generar una cadena nacional de comercialización, la promoción de marcas comerciales, denominación de origen y otros instrumentos de certificación que forman parte de la creación de valor de producto y que no pueden ser solventado individualmente por los productores.

El proyecto requiere de la adhesión de las provincias y la creación de un régimen de compra pública que genere un piso de demanda sobre estos productos de la agricultura familiar, además de eliminar impuestos sobre los contratos de financiamiento y suministro de bienes y servicios.

¿Es razonable que el Estado financie este tipo de actividades? Mi respuesta es sí, humaniza el modelo económico, mitiga el impacto de la pobreza, permite aplicar los impuestos de manera distributiva, equiparando las condiciones del agricultor con las del trabajador en relación de dependencia, correspondiendo su condición de ciudadanía.

3

SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA VERASAY

**Creación del Fondo Fiduciario Público
“Fondo de Asistencia Directa a Víctimas
de Trata” (O.D. N°135/19)**

Señora presidente:

En el día de hoy, tenemos la oportunidad de dar un paso más por la conquista de derechos para todas las mujeres, para hacer justicia frente a las adversidades que muchas están sufriendo.

En primer lugar, tenemos el proyecto que crea el Fondo Fiduciario Público “Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata”, ley 26.364, el cual funcionará como un fideicomiso de administración destinado a la asistencia directa de víctimas de trata y explotación de personas y tiene por finalidad ser el instrumento para que los bienes que sean decomisados en los delitos mencionados no integren el presupuesto nacional general, sino que encuentren su destino específico, conforme lo establece la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, 26.364.

La mencionada ley 26.364, juntamente con la ley 26.842, nos brindan el marco legal para combatir este delito. La trata de personas es un delito aberrante que golpea a nuestra sociedad. Configura una grave violación a los derechos humanos, atentando contra la libertad y la dignidad humana. Comprende el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional como desde o hacia otros países. Este delito implica muchas veces un enriquecimiento por parte de los proxenetas, mediante bienes que utilizan en la perpetración del delito.

Recuerdo el día en que tratamos este proyecto en plenario de comisiones de Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales y Presupuesto y Hacienda. Vinieron a exponer sus fundamentos representantes del Consejo Federal de Trata de Personas y de la Procuración General de la Nación. Allí se debatió sobre la importancia sobre qué entendemos por la asistencia directa a las víctimas de tan horrible delito.

Esta asistencia directa no puede significar que los bienes que son producto de los decomisos puedan ir, por ejemplo, a las oficinas públicas del Estado para cumplir su función, ya que esto forma parte de la responsabilidad que el Estado tiene de organizarse administrativamente para proveer este tipo de servicios. La asistencia directa implica que estos bienes deben ser destinados a las víctimas. Esta fue una definición central.

Fuertes fueron las palabras de las víctimas que expresaron que el Estado se convertiría en sus proxenetas, porque con los bienes que la organización delictiva se enriqueció, el Estado administraría la política pública. Entonces, aquí encontramos el verdadero sentido de reparación ante los derechos de las víctimas que fueron vulnerados. Cabe aclarar que de ninguna manera esta ley afectaría las acciones civiles de reparación que las víctimas emprendan. Eso está explicitado en el proyecto.

Por otra parte, tenemos el proyecto que modifica el Código Penal en su artículo 239, el que actualmente reza: “Será reprimido con prisión de quince días a un año el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”, incorpo-

rando un párrafo en atención a la premura que amerita este tipo de desacatos ante los procesos que impliquen delitos de violencia de género.

En este sentido, se elevan las penas si la orden desobedecida fuera una resolución judicial que tuviera por objeto salvaguardar la integridad física, psíquica o sexual de una persona, siendo el mínimo de la pena de sesenta días y el máximo de tres años.

Asimismo, se modifica la Ley de Protección Integral de las Mujeres, 26.485, incorporando un párrafo al artículo 32 para que dichos actos obliguen al juez interviniente a poner el hecho en conocimiento del juez con competencia en materia penal en forma urgente y dentro del plazo de 24 horas.

Además, también, en el marco de la ley 26.485, tenemos el proyecto que implementa un sistema de monitoreo, alerta y localización georreferenciada entre la persona denunciada por violencia de género y la autoridad competente, a los efectos de detectar en forma inmediata si se vulnera la prohibición de acercamiento a la víctima, en el marco de la ley. Cabe aclarar que a través del Ministerio Público Fiscal se han firmado una serie de convenios con las provincias para otorgar las pulseras electrónicas con dicha finalidad. No obstante ello, se trata también de darle a la medida preventiva el peso de la ley, sumándola a las ya existentes en ella.

En definitiva, señora presidente, los tres proyectos que tratamos en el día de la fecha tienen por fin brindarle a la Justicia instrumentos, mediante la habilitación de medidas urgentes de carácter preventivo, que tienen por objeto salvaguardar la integridad física, psíquica o sexual de las víctimas de violencia de género, así como también, a través de la reparación para las víctimas de trata.